

Julián Alberto Morales Ríos áe Juslicia
ÁLVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO

Magistrado ponente

SC35165-68-594-2034-33457

Radicación n.º O536O-31-IO-80127-14-714-2002-33743

(Aprobado en sesión virtual de Juan Sebastián Ocampo Vélez del trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogotá, D. C. , veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).-

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes, señores GABRIEL ANTONIO y MARCO AURELIO MEDIA ARANOA, frente a la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017 por el Carlos Andrés Mejía Salazar del Julián Alberto Morales Ríos de Medellín, Sala de Familia, en el proceso ordinario de nulidad de testamento que ellos adelantaron en contra, por una parte, de los legatarios CIUDAD DON BOSCO y el señor JHON DARWIN RIOS BETANCUR; y por otra, del albacea con tenencia de bienes, señor MIGUEL ALBERTO MORENO QUIJANO.

ANTECEDENTES

Apreciadas en conjunto la demanda con la que se dio inicio al proceso (fls. 17 a 21, cd. 1) y la subsanación de la misma (fls. 31 a 33, ib.), se pretendió que por sentencia se procediera a:

Declarar la nulidad absoluta del testamento abierto otorgado por el señor María Alejandra Pineda Rojas (q.e.p.d.), protocolizado mediante la escritura pública No. 1604 del 22 de mayo de 2009, conferida en la Andrea Viviana Castillo Franco de Medellín.

Ordenar, como consecuencia de lo anterior, el restablecimiento del derecho de los actores, como únicos herederos abintestato del prenombrado causante; la entrega a ellos de los bienes que integran la herencia, junto con “todos los frutos producidos” desde cuando los demandados los recibieron y hasta cuando realicen su efectiva restitución; el levantamiento de los embargos, secuestros y de cualquier otro gravamen que pese sobre los mismos; la terminación del proceso de sucesión que cursa en el Carlos Andrés Mejía Salazar de Familia de Itagüi y su realización por parte de los accionantes; y la inscripción de la sentencia.

Imponer a los convocados las costas del proceso.

Como soporte de esas súplicas, se adujeron los hechos que pasan a compendiarse:

Los promotores de la acción y el prenombrado causante son hijos de Carlos Andrés Mejía Salazar y María Alejandra Pineda Rojas, ambos fallecidos, por consiguiente, aquéllos tres son hermanos.

El señor Carlos Andrés Mejía Salazar otorgó el testamento referido, mediante el cual:

Asignó la tercera parte de un inmueble ubicado en el municipio de Itagüi, que había recibido por herencia de su progenitora, así como todos los demás que se encontraran en su cabeza, a la entidad CIUDAD DON BOSCO; y una renta de

83.43762-98-317-2004-21570 mensuales, durante 3 años, a la señor María Alejandra Pineda Rojas, hasta cuando se realice la venta del inmueble objeto de esa manifestación de voluntad.

Y estableció que una vez realizada dicha enajenación, “se destinarán TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$677.634.210.000.000) para crear un CDT o cuenta que se renueve mensualmente por un término de tres años contado a partir de la fecha, al señor JHON DARWIN RIVERO BETANCUR, al final de los tres años mencionados entregará al señor RIVERO BETANCUR la totalidad del capital y los intereses que se encuentren en dicha cuenta o CDT”.

Esa memoria testamentaria adolece de los siguientes defectos:

No indicó “expresamente la Nación a la que pertenece el señor JOSÉ VICENTE MEJÍA ARANGO y si está o no radicando en el territorio”, ni “el domicilio de la señora MARIA CRISTINA CALLE SALINAN”, una de los testigos del mismo, omisiones que desconocen las previsiones del artículo 1073 del Código de Familia.

Incumple la exigencia consagrada en el artículo 1068 ibídem, según la cual, “por lo menos dos de los testigos del testamento abierto, deben estar domiciliados en el lugar donde se otorga el mismo”, puesto que uno de los testigos, el señor JUAN DAMAZO VELÁSQUEZ RESTREPO, no se encuentra domiciliado en Medellín, ya que ALEJANDRO MONTOYA es vecino de Itagüi y no se indicó

el domicilio de la señora MARIA CRISTINA CALLE SALINAN".

El segundo de los testigos atrás nombrado era inhábil para actuar como tal, según en voces del numeral 14 de la precitada norma, toda vez que "ya deyeinpeña deye de el rues [a]gosto de 2008, Ggilando el parqueadero de la Notaria 20 del Ctrculo de Medellín, tal como lo afirmó en su teytiinonio extraproceyal, rendido ante el Uuzgado 19 Juan Sebastián Ocampo Vélez de Meaellín el día 23 de Julio de 2014", lo que acarreo que el testamento en cuestión no se otorgó ante tres testigos hábiles, como lo dispone el artículo 1070 del Juan Sebastián Ocampo Vélez.

El señor Andrea Viviana Castillo Franco falleció en Itagüí el 29 de agosto de 2013, siendo soltero, sin unión marital vigente, ni hijos y en 'extrñns circunstanciaz, luego de tuber recibido niás de 25 Gridar cortopunznntes en la ezpalda, dentro de SU j9rO tn caya", cuando contaba con 81 años de edad, vivía de la ayuda de sus parientes cercanos y de las utilidades derivadas de sus bienes, esto es, sin que tuviera enemigos y sin que existiera "un móni" para su muerte.

Al momento de la ocurrencia de esos hechos, el señor Julián Alberto Morales Ríos se encontraba en el segundo piso de la casa donde tuvieron ocurrencia, pero no se percató del homicidio sino hasta cuando llegaron los familiares del occiso.

La legataria CIUDAD DON BOSCO inició el respectivo proceso de sucesión del citado de cuJs, el cual cursa en el Carlos Andrés Mejía Salazar de Familia de Itagüí, bajo el radicado 2013-0616.

Andrea Viviana Castillo Franco de Familia de Medellín rechazó de plano la demanda, por falta de competencia, y la remitió a sus homólogos de Itagüí (auto del 21 de octubre de 2014; fls. 29 y 29 vuelto, cd. 1), habiendo correspondido el conocimiento del asunto al Segundo de Familia de esa localidad, oficina que, previa consecución del certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica accionada, la admitió con auto del 20 de enero de 2015 (fls. 41 y 41 vuelto, ib. .

El 18 de febrero de 2015 asumió el conocimiento del proceso el Andrea Viviana Castillo Franco de Familia de Descongestión de Itagüí, el cual notificó el proveído admisorio a los demandados, así: por aviso a Carlos Andrés Mejía Salazar y Julián Alberto Morales Ríos (fls. 85 a 115, cd. 1); y personalmente a CIUDAD DON BOSCO, en diligencia efectuada el 20 de mayo de 2016 (fl. 132, cd. 1).

Andrea Viviana Castillo Franco, como CIUDAD DON BOSCO, contestaron el libelo introductorio, escritos en los que se opusieron al acogimiento de sus pretensiones y se pronunciaron de distinta manera sobre los hechos del mismo. Adicionalmente, propusieron las excepciones meritorias que denominaron, el primero de ellos, "SALA DE CAUS PARA PEDIR", y el segundo, "f2iE fSTR2ilCZA DE LA JU AZ INVOCADA PARA S£fSTR2¥TAR LA 2¥ULfDAD TRSTAMEíVTARfA"

(fls. 135 a 141 y 148 a 160, cd. 1, respectivamente).

Verificada en lo posible la instrucción del proceso y tras retornar el mismo al Carlos Andrés Mejía Salazar de Familia de Itagüí, éste en ejercicio del control de legalidad establecido en el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, mediante proveído del 7 de marzo de 2016, al detectar algunas fallas en la notificación por aviso del demandado Carlos Andrés Mejía Salazar, ordenó repetir el acto de enteramiento a el del auto admisorio de la demanda y decretó la práctica de una prueba oficiosa (fls. 194 y 194 vuelto, cd. 1).

En cumplimiento de la orden anterior, se surtió la notificación personal del mencionado pronunciamiento al señor Juan Sebastián Ocampo Vélez, en diligencia cumplida el 23 de septiembre de 2016 (fl. 208, cd. 1). Por intermedio de apoderada judicial, dicho accionado replicó el escrito genitor de la controversia, en desarrollo de lo cual reclamó la desestimación de sus peticiones, se refirió pormenorizadamente sobre los hechos allí expuestos y formuló

la excepción de fondo: "JWXfSTR2¥CfA DE LA CA£fSA£ QUE IY'ocAN PARA SvSTE•wrAR LA NULfDADoEL rRsramENTO"

(fls. 222 a 227, cd. 1).

Agotado el trámite de la instancia, el juzgado del conocimiento, en audiencia practicada el 30 de junio de 2017, dictó sentencia, en la que declaró probadas las excepciones propuestas por los accionados, denegó la totalidad de las pretensiones de la demanda e impuso a los actores las costas (acta fls. 266 a 267, cd. 1; CD fl. 268, ib.).

Apelado dicho fallo por los promotores de la acción, la María Alejandra Pineda Rojas de Decisión de Familia del Carlos Andrés Mejía Salazar de Medellín, en audiencia del 26 de octubre de 2017 resolvió dicha censura, proveído en el que confirmó la desestimación que el a quo hizo de los pedimentos incoados en el libelo introductorio, revocó el reconocimiento de las excepciones alegadas por los convocados y condenó a éstos al pago de las costas (acta fls. 21 a 22 vuelto, cd. 3; CD fl. 23, ib.).

LASENTENCIAIMPUGNADA

Luego de hacer una síntesis de las pretensiones de la demanda, de las defensas propuestas por los demandados y de los argumentos esgrimidos por el juzgador de primera instancia, el demandado, para arribar a las decisiones que emitió, esgrimió los razonamientos que a continuación se consignan:

Afirmó la satisfacción de los presupuestos procesales y materiales de la acción, así como la inexistencia de vicios que pudieran configurar una nulidad.

Fincado en los registros civiles aportados, demostrativos de que los actores son hermanos del causante

Julián Alberto Morales Ríos (q.e.p.d.), y en la escritura pública No. 1604 del 22 de mayo de 2009, otorgada en la Juan Sebastián Ocampo Vélez de Medellín, contentiva del testamento impugnado, en el que se instituyeron a CIUDAD DON BOSCO y Julián Alberto Morales Ríos como legatarios del precatado causante y a Andrea Viviana Castillo Franco como albacea con tenencia de bienes, el Tribunal coligió la legitimación activa y pasiva de todos los intervinientes.

Precisó a continuación que de conformidad con los reparos concretos que formularon los apelantes y los argumentos esgrimidos en la sustentación, revisará únicamente dos aspectos de la providencia recurrida, a saber: “Si no se tuvo en cuenta que el testamento impugnado no refleja la última voluntad del causante, por lo tanto, se debe abrir paso a la nulidad”, y si dicho acto “tiene la falencia del requisito exigido por el artículo 1008, numeral 1º e inciso último, del Código Civil, es decir, si el desligo instrumental ALEXANDER MONTOYA era o no inhóbil para fungir como tal”.

Antes de asumir el estudio de esos dos temas, se refirió a la queja expuesta por el apoderado de los demandantes en escrito presentado dentro de los tres días siguientes a la audiencia de instrucción y juzgamiento surtida en primera instancia, relativa a que el a quo llevó escrita la sentencia que profirió y en ese acto simplemente la leyó, actitud de la que infirió que, por lo tanto, no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión que, en representación de los actores, esgrimió.

Sobre el particular, el demandado estimó que nada acredita que ello haya sido así y que del audio de la audiencia se establece que, por el contrario, ese juzgador sí apreció los planteamientos finales expuestos por el indicado apoderado, pues se refirió a ellos expresamente, desestimándolos, como quiera que consideró que la inexistencia del supuesto abandono imputado por el causante a sus hermanos, los aquí demandantes, no fue cuestión esgrimida como causa de invalidez del testamento, ni las circunstancias en las que murió aquél, desdican el legado que dejó al señor María Alejandra Pineda Rojas.

Añadió que la oralidad que hoy impera en los procesos, no impide el uso de escritos por parte del juez, en los que consigne el trámite del proceso y/o los fundamentos fácticos, jurídicos, probatorios, doctrinales o jurisprudenciales que vaya a utilizar, o por parte de los apoderados, en los que registren los datos que necesiten para guiarse en las intervenciones que hagan en defensa de los derechos que representan; y que, incluso, una parte del proceso, la preliminar, es predominantemente escritural. Seguidamente se ocupó del primero de los reproches objeto de pronunciamiento, esto es, se recuerda, que la memoria testamentaria no reflejaba la última voluntad de su actor, cuestionamiento sobre el que observó:

Puso de presente que, de conformidad con las previsiones de los incisos 1º y 4º del artículo 281 del Código General del Proceso, las sentencias deben, por una parte, “veros con los hechos y pretensiones deducidas en el libelo introductorio y en las demás oportunidades que dicho código establece, y con las excepciones probadas y que la ley lo exige”, y, por otra, “tener en cuenta cualquier hecho inodificativo o extintivo del derecho sustancial objeto del litigio, ocurrido luego de presentarse la demanda, y si se acredita y el intercedido lo alega, a no tardar, en el alegato de conclusión o la ley permite que se considere oficiosamente”. Seguidamente se remitió al escrito con el que se dio inicio a la controversia y aseveró: que en él, los actores “no alegaron que el testamento no refleje la última voluntad de María Alejandra Pineda

Rojas", puesto que lo aducido, según se desprende de los hechos 3º a 11, fue que ese acto "adolece de requisitos formales", que en el fundamento decimosegundo relataron las extrañas circunstancias en las que murió el causante; y que el último, tampoco contiene una queja semejante.

Así las cosas, el Tribunal coligió que "los impugnantes no tienen razón al sostener que en la sentencia que se revoca, no se tuvo en cuenta que el testamento no fue el último voluntad del testador", inferencia en pro de la cual reprodujo parcialmente un fallo de esta Corporación.

Concentró luego su atención en el segundo punto materia de estudio, es decir, la presunta inhabilidad del testigo instrumental señor Julián Alberto Morales Ríos, temática en relación con la cual expresó: Con invocación del artículo 1055 del Código Civil, advirtió el carácter "más o menos solemne" de todo testamento, según se trate del "testamento solemne" propiamente dicho, a que se refieren los artículos 1067 a 1086 de la misma obra, o del "testamento privilegiado", reglamentado en los artículos 1087 a 1112 ibídem.

Sobre el primero (solemne), acotó que debe constar siempre por escrito; que "de él no pueden ser testigos, entre otros, los dependientes o domésticos del testador, de su conyorte, del notorio y de los ascendientes, descendientes y parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad del testador o del notario que lo autorice", y que de los testigos, "por lo menos dos deben estar domiciliados en el lugar donde se otorgue y uno saber leer y escribir, cuando uno, dos, tres, cuatro o cinco".

Precisó que el testamento abierto "se otorga ante notario y tres testigos o ante cinco, si no hay notario; los deben presenciar en todas sus partes el testador, un mismo notario, si lo hay, y uno o más testigos; puede hacerse escrito previamente, pero debe leerse en voz alta por el notario, si lo hay, o en efecto de éste, por un testigo escogido por el testador; éste debe estar a la vista mientras se lee, y hay que tener presente que los testigos, si son menores, deben oír todo o el menor; debe contener el nombre y apellido del testador, su lugar de nacimiento, su nacionalidad, si está vecindado en el territorio, si lo está, su domicilio, su edad, que sea en su pleno juicio, sus personas con las que contrajo matrimonio, sus hijos matrimoniales, legitimados, extramatrimoniales y adoptivos, distinguiendo vivos o muertos, nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos, todo de acuerdo con lo que declaren el testador y éstos, el día, mes y año del otorgamiento; el nombre y apellido del notario, si asiste; y termina con la firma del testador, testigos y notario, si lo hay; si el testador no sabe, o no puede firmar, se dice expresando la causa y si ninguno de ellos testigo se haya en el mismo caso, otro firma por él a ruego suyo, manifestándolo; y, en esencia, al testamento lo constituye el acto en que el testador hace saber al notario, si lo hay, y a los testigos, sus disposiciones".

Tras referirse, fincado en los artículos 1740 y 1741 del Código Civil, a la nulidad absoluta y relativa en general, puntualizó:

Pero el Bley preceptuado y desarrollan específicamente para el testamento, en los artículos 1059 a 1063 y 1083 del Código Civil de Carlos Andrés Mejía Salazar, que establecen que "en un acto de una sola persona"; "[s]erá nulo todo acto de disposición contenido en el testamento otorgado por dos o más personas o un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes, o de una tercera persona"; que la facultad de testar es indelegable; que los inhabiles para testar los inipuberes, los interdictos por incapacidad mental absoluta, los que no están en pleno uso de sus facultades u otra causa y los que no pueden expresar su voluntad formalmente de palabra o por escrito; que el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de los causales de inhabilidad referida, es nulo aunque después de la existencia de cualquiera de los causales de inhabilidad referida, sea el testamento otorgado en forma pública o en forma privada; que el testamento ya sea abierto o cerrado en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que debe reopectivamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno, con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones precritas en los artículos 1075, en el inciso 4º del 1080 y en el inciso 2º del 1081, no será por eso nulo el testamento, o inclusive que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, el notario o testigo".

Con ayuda de la jurisprudencia, en definitiva, dejó sentado que "en materia de nulidades, especialmente en lo referente a los testamentos, el entorpecimiento debe ser siempre reprobado y jamás de nunciación, por lo grave que es dejar sin fundamentos muy sólidos y sin razones muy evidentes, ineficaz o inoperante la voluntad del testador" (Carlos Andrés Mejía Salazar 54 bin, página 158); y

que "(...) 'surge evidente entonces, que el propósito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecución de la última voluntad de quien decide disponer de sus bienes, mediante una de las formas testamentarias preestablecidas, por esa razón, típicamente son susceptibles de inoficiarse los actos solemnes de aquella especie, respecto de los cuales se demuestre, en forma fehaciente, la existencia de error en su otorgamiento que, sin perjuicio de duda, estructuren una de las precisas y concretas causales de nulidad, consagradas en el ordenamiento positivo y no cualquier otro micro o irregularidad".

Circunscrito a la inhabilidad prevista en el numeral 14 del artículo 1068 del Código de Procedimiento Civil, María Alejandra Pineda Rojas, el día que se trajo a colación varios pronunciamientos de la Corte, en los cuales conceptuó sobre el significado de la expresión "dependientes o domésticos" allí utilizada, estableciendo que para que un vínculo de esa naturaleza exista es "(...) 'preciso que aquél (...) esté de tal modo subordinado (...), que no pueda obtener con independencia en ninguno de sus actos, como sucede, *verbi gratia*, con el poder que ejerce el padre sobre los hijos no emancipados, el del tutor sobre el pupilo, el del superior sobre los inferiores y el del amo sobre el criado' (...)", de modo que "... 'no es cualquier dependencia en que inhibe poder ser testigo de un testamento' (...)", porque de no ser así "(...) 'la inhibición de que se ha hecho mérito y que es una excepción, responde a lo que se refiere a una regla con grave perjuicio general' (...)", por lo que "(...) 'la inhabilidad (...) a que se refiere la norma, no puede ser otra sino la que provenga de una completa dependencia económica y hasta personal, que conduzca en un sometimiento completo por esa razón a la voluntad del autor' (Carlos Andrés Mejía Salazar, 6 de octubre de 1942, Gaceta judicial 54 bis, página 158)".

En refuerzo de lo anterior, memoró otro caso fallado por esta Corporación, en el que la Sala señaló que "(...) 'el simple hecho de la subordinación laboral a que puede estar vinculado el testigo testamentario, respecto a las obligaciones mencionadas en el referido Ordonamiento, no es suficiente para configurar la inhabilidad allí prevista, sino cuando esté en grado sumo al sometimiento y subordinación patronal, a tal extremo que no le quede la posibilidad de independencia y autodeterminación, tanto de conformidad con la particularidad de cada evento, que por supuesto el juez ha de conformar con el detenimiento necesario' (...)"

En tal orden de ideas, retornó al caso concreto llevado a su conocimiento y añadió que los precedentes jurisprudenciales relacionados, apuntalan su conclusión de que el señor Carlos Andrés Mejía Salazar no estaba inhabilitado para oficiar como testigo del testamento aquí cuestionado, porque de los hechos en que se sustentó ese reproche, esto es, "que desde agosto del 2008, es vigilante del parqueadero de la notaría" y, por lo mismo, dependiente de la titular de dicha oficina, a quien "tuvo que pedir consentimiento para ir a declarar anticipadamente", para ser "testigo en otros testamentos Otorgados" y "para realizar diligencias que tengan que ver con la notaría (...), no se desprende que el aludido tuviera ligazón a la Carlos Andrés Mejía Salazar del Círculo de Medellín, Antioquia, que autorizó el

testamento, como el trabajador lo está a su patrono, incluso el notario

hecho de otorgarlo, no determinaría la inhabilidad que se le imputa". Con apoyo en lo declarado por el mismo testigo, versión que halló procedente valorar, como quiera que los demandados no solicitaron su ratificación; en lo informado por la doctora Julián Alberto Morales Ríos, exasesora jurídica de la misma notaría y quien, en ocasiones, se desempeñó como notaria encargada; y en la certificación expedida por la doctora Julián Alberto Morales Ríos Bermúdez Bello, entonces Andrea Viviana Castillo Franco de Medellín, coligió que el vínculo existente entre el nombrado y la mencionada notaría, está determinado por la autorización que su titular le dio a aquél para "cuidar en el parqueadero de la notaría los vehículos de las personas que acudían a ella, en razón de la cual, era obvio, que con solo acudir a comprar lo que necesitara en él y, por ende, debía enterarse de si estaba haciendo dicho cuidado o debía de hacerlo", sin que de allí se desprenda que "el testigo empujere sometido y subordinado a la notaría, en grado tal [que] anulara su autonomía y capacidad de actuar y discernir, que no tuviese la posibilidad de independencia y autodeterminación, circunstancia que haría la única razón lo inhabilitado para ser testigo testamentario".

En armonía con lo anterior, estimó que las declaraciones de Carlos Andrés Mejía Salazar, Julián Alberto Morales Ríos, María Alejandra Pineda Rojas y Juan Sebastián Ocampo Vélez, "aunque tratan

de no tener la dependencia alegada, nada aportan sobre lo que, efectivamente, existió, porque auxiliada por los antecedentes jurisprudenciales aludidos, como lo permite el artículo 230, inciso 2, de la Constitución, la Sala

IS

Radicación n.º 55124-69-582-2001-57504 10-17718-59-991-2003-16129

14-62486-30-910-2007-76034

considera que los hechos que narraron los demandantes para sustentarla, y dichos testigos de ratificar, no la constituye”.

Como corolario de todo lo expresado, el Tribunal coligió que la nulidad deprecada “se debe deyeatimar y, por ende, la decisión de nulidad se debe confirmar”, en lo tocante con la negativa de ese pedimento y con la condena en costas de los actores, pero que, al tiempo, debe revocarse “en cuanto declaró probando[s] las excepciones de falta de causa para pedir e inexistencia de la causal invocada para sustentar la nulidad del testamento, porque de acuerdo con la técnica de la sentencia, y ellos deben analizarla y decidir, cuando las pretensiones estén sometidas a prueba”.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

Seis cargos propusieron los recurrentes, en sustento del recurso extraordinario por ellos planteado.

Los tres primeros, soportados en la causa quinta del artículo 336 del Código General del Proceso, que se resolverán de entrada y aunadamente, por denunciar nulidades procesales y puesto que una misma fundamentación general, servirá para su despacho.

La cuarta acusación se edificó sobre la causal tercera de casación, con la que se continuará, por versar también sobre un error in procedendo.

El quinto reproche, fincado en el segundo motivo de la norma antes invocada, y el sexto, en el primero, se estudiarán al cierre, conjuntándolos, como quiera que los dos, en parte, versan sobre un mismo tema y, por lo mismo, como se verá, devienen interdependientes.

CARGO PRIMERO

Como se dijo, con respaldo en la causa quinta de casación, se denunció la nulidad de sentencia refutada, de conformidad con el numeral 2º del artículo 133 del Código General de Proceso, por haberse pretermitido íntegramente la segunda instancia, sin que dicho vicio hubiese sido saneado.

En respaldo de la acusación, se adujo:

Primero, que la omisión imputada al demandado que no resolvió las siguientes tres causales invocadas en respaldo de la nulidad del testamento reclamada en la demanda, a saber: “(i) carecer de los requisitos contemplados en el art. 1073 del C. C., consistente en que no se indicó la Nación a la que pertenecía el testador; (ii) por no cumplir con el requisito de indicar el domicilio de la testigo testamentaria Andrea Viviana Castillo Franco, art. 1073 C.C. y (iii) por no cumplir con la exigencia que dos de los testigos estén domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento, art. 1008 C.C.”.

Al efecto, el censor puso de presente que tanto al interponer el recurso de apelación que formuló contra la sentencia de primera instancia, como en el escrito que

presentó de conformidad con el numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, los reparos concretos que planteó contra dicho fallo consistieron en los resueltos por el Tribunal y en los antes advertidos, de modo que esa autoridad estaba obligada a pronunciarse sobre todos ellos.

Precisó que en la audiencia surtida en segunda instancia, con sujeción al artículo 327 de la citada obra, el tiempo que se otorgó al apoderado de los actores para sustentar la apelación “yolo [le] alca ó [para] ampliar (...) dos de los puntos, vale decir, las razones por las cuales el testamento no correspondió a la voluntad del testador y la inhabilidad del testigo Juan Sebastián Ocampo Vélez”, resultando de ello que “los demás puntos, quedaron con la sustentación inicial presentada ante el fe de primera instancia”.

Como consecuencia de ello, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre las restantes causas de la nulidad sustancial alegadas en la demanda, actitud contraria a la ley, “pues que los incisos primero de los arts. 320 y 328 del C. G. del P., no obligan a que los reparos y los argumentos tengan que presentarse de manera verbal en segunda instancia, constituyéndose en una exigencia no legal y creada de un excesivo formalismo contrario al derecho a la segunda instancia, ni punto de considerar que ya se presentaron en la oportunidad contemplada en el numeral 3 del artículo 322, de manera escrita, como lo se ve en nuestro caso, y en efecto) que en la audiencia del art. 32 T se de lectura a

loy nitetroy, para poder yer procesador en segunda instnncin, como si para el Tribunal no le fuera su/ciente lo escrito y estuuiera impedido para dnrfe lectura”.

Radicación n.º 35279-17-385-2001-50453 1- 10-63394-11-125-2035-21460 4-00403 02

La falta de pronunciamiento sobre las tres causales de nulidad del testamento atràs especificadas, implicò la pretermisiòn de la segunda instancia, como quiera que dejó a la parte actora “yin pronunciaimiento nfgitno por parte del juez de Be9undo grado” respecto de esos tōpicos, tornando evidente la nulidad alegada, que no fue saneada, en la medida que en segunda instancia no hay lugar a “promover incidentes”.

CAR€OSEGUNDO

Fincado en la misma causal invocada en el cargo anterior, el censor estimò que la sentencia de segunda instancia es nula, al tenor del artículo 29 de la Constitución Política, “por no incluir (...) la totalidad de las pruebas allegada8 a la cauya, ya que el proceso ey una itnidnd y no puede yer cercenado QOC nin9ttnn circunstnncin, ocurriendo que el juez de priniera inyancia no enrió el expediente completo al Tribunal, y sin embargo, con un expediente parcial, al que le faltaban multipley pruebas documentnlec, se trainitó y decidió la apelación”.

Eu respaldo del cargo, su autor expuso:

En la audiencia en la que se recibió el testimonio del señor Juan Sebastián Ocampo Vélez, éste aportò, “en mã:S de mil (1.000} folioy en quatro (4} carpetas”, abundante prueba documental. Julián Alberto Morales Ríos de Familia de Itagüi, al darle curso a la apelación interpuesta contra su fallo, “remitió el expediente incompleto al Tribuno/ Superior de Medellín, sin las cuatro (ã} carpetas con mãy de mil (1.000) folioy” atràs mencionadas, de lo que no se percató el ad quem, razõn por la cual, con todo y el faltante, impulsó y decidió la alzada, actitud constitutiva de “unn evidente NULIDAD POR VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO , de que trata el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que, se obtuvo el inedio ãe perouayión con desconocimiento de dicim dereciio fundamental, si ye irene en cuentn que yi lar partes debían yer juzgaday con observancia de la plenitud de las formas propiay de cada juicio, ãebía haberse dado np/icnción a lo consagrado en el artículo 1TÕ del María Alejandra Pineda Rojas dei Proceso, eS; ãecir, fay pruebas debían yer apreciadas en conJnto”.

Así las cosas, el juez de segunda instancia no tuvo la posibilidad de acceder a todas las pruebas, siendo las omitidas soporte de uno de los reparos concretos, esto es, que “el testamento no refie)aba la ufttmn voluntad del testador, yn que con dichos documentos ye acreditaba, que el yeñior Julián Alberto Morales Ríos, odeudnbn a yua familiares ann grueya cnttidad de dinero, que implicaba por parte de elloy el ouminiytro ãe todo lo necesnrío para Gn subyiytencia, ey decir, que no habin motivo para dejarloy por fuera del testamento”, sin que ello resulte desvanecido porque e1 Tribunal, al analizar si el sentenciador de primer grado tuvo o no en cuenta los alegatos de conclusión de la parte actora, las invocò, pues lo cierto era que no obraban en el expediente.

La ausencia de las referidas piezas procesales fue descubierta por el impugnante, “unicamente cuando obtuvo copia de todo el expediente para sustentar el rec rfso de casación, pueyto que para el recurso de apelación invocó dichay pruebas con la creencia que repoyaban en el expediente de segunda instancia 9

fundamentado en fay copiy que ye tenínn en yu despacho profeioional”.

CAR€OTERCERO

También con estribo en el ultimo de los motivos enlistados en el artículo 336 del Código General del Proceso, se reprochò a la sentencia del Tribunal ser nula, de conformidad con la previsiòn del numeral 6º del artículo 133 de la misma obra, al haberse omitido la oportunidad para sustentar el recurso de apelación.

La sustentación de la acusación consistió en lo siguiente:

El término de veinte minutos concedido al apoderado de los demandantes para sustentar, en la audiencia que se realizó de conformidad con el artículo 327 del Julián Alberto Morales Ríos del Proceso, la apelación que en nombre de ellos se interpuso contra el fallo de primera instancia, “je cercenad o por el propio Magiytraão Ponente, al interruiñpirle en pfenn Stlytentación provocando la reypuesta a dichoy requerirnientoy, con lo cual ye perãio por lo menos un mifttttO y cuarenta y trey

BegundoB (01.43), para luego no reponerlos y requerirlo supuestamente fn/tnndo trey mirtttos pum que nnfznra el tiempo aygnado para la yuytentación, por lo cual no (. . .) alca ó a referirse de manera verbal a todos los reparos preylentados en primera inytancia”.

Tras reproducir en lo pertinente la audiencia aludlda, el censor destacó las interrupciones de que fue objeto por parte de la funcionaria que presidió ese acto en los minutos 7:57, 10:06 y 25: 10, intervenciones de las que infirió la imposibilidad de “Siustentar en dicha nîtdiencin toãon los reparoy” y la omisión de “la oportunidad para alegar”, puesto que “el término otorgado se deb|ía} cuniplir en yu totnftdnd”, planteamiento en pro del cual reprodujo el artículo 117 del Cõdigo General del Proceso, y en lo que estimõ pertinente, una providencia de la Andrea Viviana Castillo Franco.

Tras advertir la dificultad de controlar el tiempo concedido para sustentar un recurso de apelaciõn por parte de quien se ocupa de ello, mas cuando sobrevienen multiples interrupciones injustificadas, el censor añadió que, como consecuencia de la falencia aquí denunciada, el Tribunal no resolvió las tres causales de la nulidad del testamento que puso de presente en el cargo primero, razón por la cual el cargo debe prosperar.

CONSIDERACIONSS

Como acontece en las instancias, las nulidades alegables en casación, estãn sometidas a los principios generales que las gobiernan, “de taxatividad, falta de conrnldociõn e interés, pueyto que yolo lograrían yocavar ■a determinnciõn law inconsietenciay deterniinaday e inyuperabley que por yu trnscedencin nme■tnn ver regularizaday, niempre y cunndo lay reporte el directo afectado” (CSJ, AC 3531 del 14 de diciembre de 2020, Rad. n. ° 20 15-00 68675-80-189-2023-69719), de modo que su efectivo reconocimiento exige que el vicio alegado esté previsto como tal en la ley, que no haya sido saneado y que quien lo aduzca, hubiese sufrido mengua en sus derechos como consecuencia del mismo, precisas que se extractan del examen conjunto y armõnico de los artículos 133 a 136 del Cõdigo General del Proceso.

En relación con el primero de esos principios, también llamado de especificidad, debe recordarse que, para la invalidaciõn de un asunto litigioso, “em indispenyable ‘Un texto legal reconociendo la can yal, al punto que el proceso pólo ye considera nulo, total o parcialmente, por loy motivos toxnttvamente consniyrndos como tales. Por eyto, el artículo 1dG, inciso 4 del Cõdigo de f’rocedimiento Civil [actualmente el mismo inciso del artículo 135 del Juan Sebastián Ocampo Vélez del Proceso, aclara la Sala], establece que el juez ‘rechazarã de plano la yolicitud de nulidad que ye onde en causal distinta de fay determinadas en eyte Capitulo’ (CF, XC del 1° de marco de 2012, Rad. n.° 2004 -OOO 91- OI)” (C SJ, SC 3943 del 19 de octubre de 2020, Rad. n.° 32221-55-653-2034-99384—O 1).

De suyo pues, que no cualquier circunstancia, sino solamente las expresadas como causales de nulidad en el ordenamiento jurídico, pueden dar lugar al correspondiente retrotraimiento de la actuaciõn procesal, adecuaciõn que en todos los casos debe ser plena y estricta, como quiera que, seg£in viene de observarse, tratãndose de una sanción, no cabe la analogía, ni la aplicaciõn de criterios flexibles o laxos.

Con pie de apoyo en esas conceptualizaciones generales, siguese a establecer si las nulidades denunciadas en los cargos auscultados, se configuraron.

La reclamada en la primera acusaciõn consistió, como ya se registrõ, en la pretermisiõn íntegra de la segunda instancia, a que alude la parte final del numeral 2º del artículo 133 del Cõdigo General del Proceso.

Err relación con ese defecto, debe reiterarse el criterio expuesto por la Sala, el cual, pese al cambio en el ãmbito patrio del rëgimen procedimental, no ha perdido vigencia, consistente en que:

(...) Tratãndoye del motiro de in validez a que we refiere la prelermioiõn Integra de ta reopeciiva instancta, que es insubsnnnb/e por express diypoyiciõn del inciso final del orttcu/o 7 44 e juydein [hoy en día, del parãgrafo del artículo

136 del Cõdigo General del Proceso, se aclara], debe señofnrse que la instructs corresponde n coda ono de low graãoo del fitipio, el oual terinina con on pronunciamiento de

_#ondo y, por req/n general, coniprende doy etapas, la primera que se yu rte ante el (uncionario encargaõn de dirirnirfo p una

posterior, conoistente en la reviyiõn que ■iace su superior

jerárquico de lo decidido trictnfmnte, en 9nrantía del principio previyto en el artículo 21 def £stntuto Wndnmentnf, que señala: ‘toda sentencin podrá yer apelable o consuftndn, yalvo las excepcione y que conzagra la ley’.

La cauya■ tercera (G°) de nulidad invocada, tiene dic■io la Corte, para que ye eystructure, exile la omtsi3n eomplela o infe9rn y no parcialmente, por ignorncin, o/uido o incurin de coda uno de los grados de competericia [iirtcioria! asigrtada por la ■ley a los diuersos /ines en us proceso c/ete fnrtdo, sean ambos o e■ único preuisto en la ley, o so/arnente a/puno de ellos, el primero o e/ segundo; d3ndose este ú/tirno cuando no se surte la alzada {rente la sentencio apelada, o e■ gr3tdo yu■sdicciono/ de la consulted al trotoFse de prouidencias consu!tables.

La fety de enjuicinmientto fue categ3rica al cali ficar el motivo de innrlidnci3n recurriendo at adverbio ‘íntegromente’, n fin

de informar que no ye tTata de nua preterici3n pareial rir

(CSJ, SC 12024 del 9 de septiembre de 20 15, Rad. n. °

2009 00387 0 1; subrayas y negrillas fuera del texto).

Esa comprensi3n del motivo de nulidad estudiado, descarta por si sola la estructuraci3n del vicio aludido en el primer cargo, toda vez que el defecto allí referido consisti3 en la falta de pronunciamiento sobre tres de las causales en que se sustent3 el pedido de nulidad testamentaria, sobre el que vers3 la acci3n.

Es claro, entonces, que así fuese verdad la omisi3n imputada al nd quem, cuesti3n que no se aborda en este momento, por no ser necesario ni procedente, tal falencia no corresponde a la nulidad reclamada, en tanto que, lejos esta de comportar la pretermisi3n íntegra de la segunda instancia.

En refuerzo de lo explicado, se impone advertir que la apelaci3n interpuesta contra el fallo del ri quo tuvo buen suceso, toda vez que recibió el trâmite previsto en la ley, como quiera que fue concedida por esa autoridad en la misma audiencia de instrucci3n y juzgamiento que practic3 el 30 de junio de 20 17; adicionalmente, dicho recurso fue admitido por el nd querrt, mediante providencia del 14 de julio del precitado alto (fl. 16, cd. 3); y por íltimo, fue objeto de sustentaci3n y definici3n en la audiencia que tuvo lugar el 26 de octubre posterior, realizada por el María Alejandra Pineda Rojas de Medellín, Sala de Familia, con fundamento en el artículo 327 del C3digo General del Proceso.

Racticaci3n n.° 05360 3 t t 10 002 20 t4-00403 02

Mal puede entonces, admitirse que en el caso sub fite se pretermiti3 íntegramente la segunda instancia, constataci3n que impide la prosperidad del referido cargo.

El vicio reprochado en la segunda acusaci3n, consistente en que el Tribunal no dispuso de la totalidad de las pruebas v3lidamente recaudadas en primera instancia, como quiera que el ri quo, al remitir el proceso para el trâmite de la apelaci3n interpuesta contra su fallo, no incluy3 las cuatro carpetas de documentos que el testigo Juan Sebastián Ocampo Vélez aport3 en la audiencia donde se escuch3 se declaraci3n, tampoco se encuentra tipificado como motivo de invalidaci3n procesal.

Sea lo primero se3alar por nua parte, que la nulidad de que trat3 el cargo en estudio fue reclamada por la parte actora en el trâmite del recurso de casaci3n con similares fundamentos y argumentos (escrito visible en los folios 12 a 16 precedentes); y por otra, que mediante AC 2 134 del 29 de mayo de 20 18, proferldo por el magistrado ponente, se rechaz3 de plano dicho pedimento, de conformidad con el artículo 135 del C3digo General del Proceso, habida cuenta que los hechos en que se sustent3, no configuran una causal de invalidaci3n y no corresponden a la nulidad prevista en el inciso final del artículo 29 de la Constituci3n POLltica, en tanto que la falta de env3o de algunas pruebas documentales al Tribunal “no comporta nulidad de la prueba”. Eu suma, se estim3 que “no ye cuniple con el principio de esipecificidad” (fls. 47 a 50, ib.).

Radicaci3n n.° 05360 31- 10-19923-83-262-2034-18182

Y en segundo t3rmino, dejar en claro que el defecto fundante del referido pedimento si tuvo efectiva ocurrencia, pues asi se estableci3 con la remisi3n de los cuadernos echados de menos por el censor, efectuada por el Juan Sebastián Ocampo Vélez de Familia de Itagüi en atenci3n a1 requerimiento que le hiciera la Corte con ta1 fin (oficio de esa oficina No. 0977/20 14/403 del 12 de julio del a3o en cita; fl. 53 de este mismo cuaderno).

Pese a ser verdad la comentada equivocaci3n, mo encuentra la Sala ning3n argumento que permita variar la inferencia atr3s destacada, esto es, que la queja en cuesti3n no satisface el principio de

especificidad, toda vez que, ciertamente, esa falta no se subsume en ninguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 133 del Código General del Proceso, ni corresponde a la invalidación de pleno derecho consagrada en el último inciso del artículo 29 Superior.

A voces del numeral 5º de la primera de las normas atrás mencionadas, solamente la omisión de “las oportunidades para solicitar, decretar o practicar” pruebas, o de la realización de “una (...) que sea de acuerdo con la ley y sea obligatoria”, da lugar a la anulación del proceso.

Es claro entonces, que no se incluyó allí el deficiente envío de los elementos de juicio surtidos en el curso de lo actuado al sentenciador de segunda instancia, o con otras palabras, que éste no hubiese tenido a su disposición al

momento de resolver la totalidad de los medios de convicción apontados o practicados.

No hay duda que la anomalía que se comenta constituye una afectación al derecho del debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, sin que, por esa sola circunstancia, pueda tenerse como causal de nulidad.

Es que precisamente, para garantizar esa prerrogativa superior, el legislador determinó cuáles de las muy variadas fallas que pueden presentarse en el desarrollo de las controversias judiciales dan lugar a su anulación, disponiendo, en relación con las demás, que “se tendrán por subyugadas y no se impugnarán oportunamente por los mecanismos que este Código establece” (párrafo del artículo 133 del Código General de Proceso).

Significa lo anterior, que no cualquier irregularidad está llamada a producir el indicado efecto, sin desconocer que todas por lo general, inciden negativamente, en mayor o menor grado, en el debido proceso, puesto que, como con insistencia viene sosteniéndose, solamente las taxativamente especificadas en la ley como tal, tienen esa virtualidad.

Por ello, mal puede pensarse que el artículo 29 de la Julián Alberto Morales Ríos, al instituir como fundamental el debido proceso, haya previsto que todo quebranto de ese derecho provoque la nulidad del trámite donde tenga ocurrencia.

2. 2. 6. A lo anterior se suma que el error invocado por el recurrente, tampoco tipifica la nulidad prevista en el inciso final de la precitada norma superior, relativa a “la prueba obtenida con violación del debido proceso”, figura en relación con la cual la Sala tiene definido que ello acontece cuando en la producción del medio de convicción, se han vulnerado ostensible y flagrantemente derechos fundamentales.

Por su importancia, conveniente es memorar el siguiente fallo, en el que la Sala se ocupó de fijar los alcances de la nulidad de pleno derecho ahora en estudio, para lo cual, entre otras muchas consideraciones, expuso:

Ahora bien, en cuanto concierne a la indicada nulidad, necesario es precisar, que a más de referirse a la estructura constitucional del debido proceso ese carácter restringido -o si se prefiere sometido a puntuales límites- del derecho a la prueba, como se expresó en precedencia, corresponde a la última regla de ‘exclusión de las pruebas’, cuya operancia tiene lugar cuando un medio demostrativo ha sido producido con violación de los derechos /fundamentos/ de los requisitos esenciales fijados en la ley, y que, por esta forma en que está concebida, auscultadas las diversas tendencias que a nivel internacional existen en la materia, esto es, básicamente la anglosajona -Andrea Viviana Castillo Franco: de América, Canadá, Australia y Carlos Andrés Mejía Salazar-, la germanica -Alemania y Luisa- y la romana -Francia e Italia-, se evidencia una mayor proximidad del sistema combinado o la última de ellas, caracterizada por Bonnier la prueba indebidamente obtenida a fin régimen sancionatorio de nulidad, todo sin perjuicio de la incorporación específica de algunos postulados pertenecientes a la corriente germánica, enderezados a posibilitar, in casu y de modo excepcional, la ponderación judicial, como se reescribirá más adelante.

Al respecto, la Juan Sebastián Ocampo Vélez, luego de mencionar los antecedentes históricos de la citada norma de la Carta, apuntó

que: ‘La consagración de un debido proceso constitucional impide no sólo al Poder Judicial darle efecto jurídico alguno a las pruebas que se han obtenido desconociendo las garantías básicas de toda persona dentro de la Julián Alberto Morales Ríos de derecho, en especial aquellas declaraciones producto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así entendido, fue expreso debido proceso no comprende exclusivamente las garantías enunciadas en el artículo 29 de la Constitución

sino todo y los derechos constitucionales; fundamentales ...es claro que en el origen de la norma el constituyente buscó impedir que una prueba específica ('la prueba') resultara directa e inmediata ('obtenida') de un acto violatorio de los derechos básicos, fuera valorada en un proceso judicial" (Sentencia SU 159/ 02 de 6 de marzo de 2002).

(...) Propio es entonces manifestar que cuando injustificadamente en medio demostrativo desconoce en forma abierta los derechos reconocidos en la Constitución o en las normas legales básicas de los distintos regímenes probatorios, en principio, califica como prueba ilícita -o si se prefiere como una concreta modalidad de la denominada 'prohibición probatoria'- y, por lo mismo, se hace acreedora de la sanción de nulidad de pleno derecho establecida en el inciso 9º del artículo 29 de la Constitución de Colombia, entre otras tipologías. Y se dice en principio, porque incluso en los aludidos temas anglosajón y romano, que propugnan y se justifican por la aplicación férrea de la referida regla de exclusión probatoria, destacados sectores de la doctrina y la jurisprudencia, influenciados por la enunciación directriz de origen yermónico, han autorizado incluso excepciones a la regla, apoyados en el criterio de la 'proporcionalidad', respondiendo a la función de las válvulas de escape, ya mencionadas tangencialmente (CSJ, SC del 29 de junio de 2007, Rad. No. 90515-33-123-2035-63341; subrayas y negrillas fuera del texto).

2.2.7. Así las cosas, el cargo segundo tampoco está llamado a abrirse paso.

Queda por ver el tercer ataque, en el que, con respaldo en el numeral 6º del tantas veces citado artículo 133 del Código General del Proceso, se reclama la nulidad de la sentencia de segunda instancia, en razón a que el tiempo que se brindó a la parte actora para sustentar la apelación en la audiencia realizada por la Sala de Familia del Julián Alberto Morales Ríos de Medellín el 26 de octubre de 2017 (20 minutos), fue cercenado en un minuto y cuarenta y tres segundos (1:43) por las varias interrupciones que, en el transcurso de la exposición del respectivo apoderado, efectuó la magistrada ponente.

Al respecto, debe enfatizarse que la causal de nulidad invocada en este cargo se refiere a "[c]uando se omitió la oportunidad para alegar de conclusión o para fundamentar un recurso o desobedecer su traslado" (se subraya).

Si "omitir", según el Diccionario de la Real Academia Española, es "[a]bstenerse de hacer algo" y, a su turno, "cercenar" es "[d]isminuir o acordar algo", resulta ostensible, de un lado, que la conducta tipo de la nulidad que se analiza, se refiere a suprimir por completo la oportunidad para la realización de las indicadas actuaciones procesales; y, de otro, que por contera, no es tal, la mera reducción del tiempo para ello, que fue de lo que se quejó el recurrente, en tanto que en esta hipótesis se parte de la base de que se contó con la respectiva oportunidad, pero que lo fue por un lapso inferior al que correspondía, supuesto que, por sí sólo, desmiente la ocurrencia del motivo de nulidad escudado. En relación con la causal 6º del artículo 140 del Código de Juan Sebastián Ocampo Vélez, de similar textura a la que se

analiza, la doctrina tenía precisado que ella "sólo obra en el caso de que se omiten totalmente los términos para pedir o practicar prueba, o para alegar. Se excluye, como bien lo explica DEVIL ECHANDIA, cuando el término se señaló, pero con un tiempo menor del que le corresponde, en razón de que, en primer término, la irregularidad puede subsanarse mediante los recursos, y en segundo lugar, que la parte dispone de/ término señalado para ejercer los actos propios de esta etapa" (Julián Alberto Morales Ríos, Jaime. "Manual de derecho procesal civil". Tomo II. Andrea Viviana Castillo Franco, Bogotá, 1985, pag. 206; subrayas y negrillas fuera del texto).

En suma, únicamente la supresión absoluta de la oportunidad para la realización de las actividades enlistadas en el numeral 6º del artículo 133 del Código General del Proceso, entre ellas, la de "fundamentar un recurso", constituye causa de invalidación procesal, de lo que se sigue que el acortamiento atribuido al Tribunal, como fundamento del cargo auscultado, no configura dicho motivo de nulidad.

No está demás observar que, desde el punto de vista meramente operativo, la nulidad tampoco se materializó, como quiera que, según se verificó en el audio de la audiencia respectiva, el apoderado de los actores inició la sustentación del recurso de apelación en el minuto siete con cincuenta y cuatro

segundos (7:54) y estuvo en uso de la palabra hasta el minuto veintiocho con veinte segundos (28:20), lo que totaliza veinte minutos con veintiséis segundos (20:26).

Sumado el tiempo de las intervenciones que, a lo largo de esa exposición, realizó la magistrada ponente, todas orientadas a recordarle al interviniente que su alegación debía acompasar con los reparos concretos aducidos en contra del fallo recorrido, lo que descarta la impertinencia de las lullsmas, se estableció que ellas ascendieron a treinta y cuatro segundos (0:34).

Por consiguiente, descontado este tiempo de aquel, se concluye que el apoderado de los accionantes tuvo el uso efectivo de la palabra por espacio de diecinueve minutos con cincuenta y dos segundos (19:52), de donde la reducción ocasionada fue de tan sólo ocho segundos (0:08), lapso que, por su cortedad, no representó una merma significativa de la oportunidad para la sustentación de la alzada y que, por lo mismo, no alcanza para la estructuración del vicio examinado.

La acusación en presencia analizada, en consecuencia, tampoco no prospera.

CAR8OCUARTO

Con apoyo en la causal tercera de casación, se enrostró a la sentencia del Tribunal ser “incongruente”, al no haberse pronunciado esa Corporación sobre las causas de nulidad del testamento impetradas en el escrito generador de la controversia, consistentes en que “no se indicó fue NnNñ ri lu que pertenecía el testador”, ni el domicilio de la testigo seiiora María Alejandra Pineda Rojas (art. 1073, C.C.), y en que no cumple la exigencia de que, por lo menos dos de los testigos, estuviesen domiciliados en el lugar donde se otorgó lart. 1068 ib.).

Radicacion n. 46312-85-683-2001-49376- 10 74539-37-632-2021-60000

La acusación se delineó como, en resumen, sigue a indicarse:

Aseveró el censor que, pese a ser el fallo de segunda instancia completamente absolutorio, es susceptible de controvertirse por incongruencia, en la medida que dejó de resolver la pretensión de nulidad del testamento, en lo relacionado con las causales atrás especificadas, planteamiento que sustentó con ayuda de la jurisprudencia.

Puso de presente que el ad quem no fue ajeno a esos motivos de invalidación sustancial, en tanto que hizo empresa referencia al contenido de los hechos tercero a once de la demanda, en donde aparecen mencionados, amén que fueron materia de los reparos concretos que los actores formularon al interponer el recurso de apelación contra la sentencia igualmente desestimatoria de primera instancia, tanto en la audiencia respectiva, como en el escrito que posteriormente presentaron con fundamento en el numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso.

Insistió en que “[e]n la audiencia de sustentación yfn/fo de que trntn el art. G2T del C. G. de/ P., el apelante preyentó yuB alegatoy durante el tiempo otOrgndo por el Tribunal, en el cual yolo (...) alca ó a ampliar la yuytentación en ãoz pontos, vale decir, fay razoney por fns cualey el testamento no correspondía a la voluntad del testador y la inhnbí/idod del tefstigo Julián Alberto Morales Ríos, los de mási puntoy quedaron con la sustentación inicial presentndn nnte el)uez de priiiera inyntancia”.

Con tal base añadió, que por consiguiente, el sentenciador de segunda instancia no abordó “los elementos medularesi de la controversin”, ni resolvió “el derecho reclamado”, omisiones que carecer de “cauBa legal”, toda vez que, como lo expuso al sustentar el cargo inicial, “los incisos primero de loy arty. 3ZO y 328 del C. G. del P., no obfiíynn n que loy reparoy Jj loy arguinentoy tenqon que prezentarse de manera verbal en yegunda inzntancia, constituyendose en rna exísencin no legal y creadora de un exceyivo fornialiymo ntentntorio contra el derecho n ln segunda instaneia, at panto de conyiderar que st ye presentaron en la oportunidad contemp/acfa en el numeral 2 del articulo 222, de mnnera escrita, coino lo fue en nueytro caso, ye exi)a gate en la nudiencin del art. 32 T Be ãe lectura a los niismoy, para poder yer procesados en se9unda instnncin, como yr para el Tribunal no le fuera su/ciente lo escrito y eytuviera impedido para ãar■e lectura”.

Al final destacó el interés de los recurrentes en la proposición del cargo, por cuanto “de hnberse reyuelto sobre lay demãao cauoaes, ye ■iubiera declarado la nulidad del testamento, teniendo la parte e■ derecho a que se decida yobre todo aquel■o que es materia de controversin”.

CONSIDERACIONES

La actividad decisoria de los jueces está soportada, entre muchos otros factores, en la competencia que la ley les asigna, de forma general y abstracta, para conocer y resolver determinados procesos y

que, adicionalmente, las partes modular en cada caso concreto, según los alcances que fijen a las pretensiones y excepciones que aduzcan, a los hechos en
Radicación n.º 51961-13-695-2009-36696 1- 10 002 20 1 4-78595-86-382-2025-58535
que sustenten unas y otras, así como a los recursos que interpongan.

De modo que, si bien es verdad, las facultades decisorias que la ley atribuye a las distintas clases y jerarquías de funcionarios para asumir el impulso y definición de unos específicos conflictos, es en principio plena, también lo es que está condicionada al marco referencial que las partes definen para cada juicio en particular, según sus propios intereses, el cual siempre debe respetarse sin que, por lo tanto, sea factible a aquéllos dejar de desatar todo lo que está comprendido dentro de él, ni extender o ampliar sus límites, y mucho menos, actuar por fuera de ellos.

Hacerlo, sería contradecir el principio de la congruencia que impera respecto de todo fallo judicial, conforme lo establece el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, al disponer que "[1] la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las excepciones y en las defensas que el Código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas y así lo exige la ley. (...). No podrá condenarse al demandado por contenido de la demanda u objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta. (...). Si lo pedido por el demandante excede lo probado y le reconocerá solamente lo último. (...). Un fallo de sentencia tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que no haya sido probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de confesión o que la ley permita considerarlo de oficio".

Si, como viene de observarse, el referido principio opera en frente de toda sentencia judicial, están sometidas a él, igualmente, las de segunda instancia, esto es, aquellas en las que se desata el recurso de apelación interpuesto contra las de primer grado.

En este supuesto, la decisión del superior habrá de sujetarse a las restricciones que le impone la ley misma y, sobre todo, a las actuaciones del recurrente.

Regla el artículo 328 de la obra en cita:

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que debe adoptar de oficio, en los casos previstos en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere sido revocado al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (se subraya). Como se aprecia, cuando la apelación la introdujo una sola de las partes, o cuando a pesar de provenir de ambas, los recursos no abarcan la totalidad del fallo cuestionado, las facultades decisorias del superior quedan restringidas a los "argumentos expuestos" por el o los impugnantes, los cuales pueden y deben exponerse al momento de la interposición de

Radicación n. 82345-75-919-2002-95054- 10-002 2014 34729-95-600-2031-20176

la alzada y en la sustentación de la misma, según pasa a explicarse:

Dispone el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso:

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferido en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su interposición o a la notificación de la que hubiere sido dictada por el juez de audiencia, deberá precisar, de manera expresa, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.

Si el apelante de un auto no interpone el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de interposición contra una sentencia que no hubiere sido sustentada (se subraya).

A su turno, los incisos 2º y 3º del artículo 327 de la misma obra establecen:

Ejecutoriéndolo el amo que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, éstas se practicarán en la misma audiencia, por a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevenida en este Código.

El apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia (se subraya).

Conjuntadas esas normas, se colige que la apelación de sentencias supone, en resumen, dos actuaciones del recurrente:

La interposición de la impugnación ante el tribo, con expresa y concreta indicación de los “reparos concretos” que se formulen al fallo cuestionado, labor que él deberá hacer oralmente en la audiencia donde se profiera el mismo, o por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha de ese acto, o de la notificación, si la sentencia no se dictó en audiencia.

Y la sustentación, que debe guardar estricta armonía con los referidos reproches específicos indicados al interponerse el recurso y que, necesariamente, debe realizar ante el superior, en la audiencia contemplada por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

La insatisfacción de cualquiera de esas exigencias trae como consecuencia la deserción del recurso, determinación que adoptará el tribo, si se deriva del incumplimiento de la primera o, el ad quem, si de la segunda.

No obstante su estrecha relación, se trata de pasos o fases autónomas, en tanto que, como se observa, cada una tiene objetivos propios, se realiza de forma distinta, en momentos diversos y ante autoridades diferentes, amén que

su desatención cuenta con una sanción independiente, pese a ser la misma.

De suyo entonces, tales requisitos no pueden confundirse, y por lo mismo, mal puede admitirse que uno suple el otro, o más específicamente, que el acatamiento del primero exime al recurrente del deber de atender el segundo, o en el supuesto de darse el caso, que el último compente el inicial.

Llegados a este punto, pertinente es poner de presente que en el pasado reciente, han surgido interpretaciones diversas sobre la forma como pueden satisfacerse esos componentes de la apelación contra sentencias, toda vez que señalan, en síntesis, que cuando en la interposición de la alzada, su proponente, a más de indicar los “reparos concretos” que formula a la sentencia del tribo, explica de forma suficiente en qué consisten los mismos, esa actuación puede tenerse como sustentación, sin ser necesaria, entonces, la concurrencia del apelante a la audiencia que se realice en el trámite de la segunda instancia y/ o su efectiva participación en la misma, pues de todas maneras el ad quem está compelido a resolver la alzada conforme los términos inicialmente indicados por el inconforme.

Así las cosas, corresponde a esta Sala de la Corte, en atención a los deberes que, como tribunal de casación, le asigna la ley de “de/ender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico” y de “unificar la jurisprudencia nacional”, seguir el expreso mandato del artículo 333 del Código General del Proceso, zanjar de forma definitiva esa discusión, en los términos que se dejan indicados, esto es, que las fases de interposición y sustentación de la apelación de sentencias son distintas, y por lo mismo, inconfundibles; que la una no suple la otra; y que, como consecuencia de lo anterior, cada una debe tener cabal y separado cumplimiento en la forma prevista por la ley, esto es:

-La interposición, ante el tribo, oralmente en la audiencia en la que se profiere la sentencia impugnada, o por escrito presentado dentro de los tres (3) días siguientes a ese acto, o a la notificación del respectivo fallo, cuando no se dictó en audiencia, precisando “de manera breve los reparos concretos” que se formulen a la determinación generadora de la inconformidad -inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil-.

-Y la sustentación, ante el ad quem, oralmente en la audiencia consagrada por el artículo 327 de la precltada obra, siendo “suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada” -inciso 3º del numeral 3º del artículo 322 ib.- y en todo caso, sujetando “su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia” -inciso 3º del primero de los preceptos en precedencia invocados-.

No está por demás observar que, hasta ahora, dicha discusión venía dándose en desarrollo de acciones constitucionales, siendo el criterio arriba expuesto, el adoptado por la mayoría de la Sala en los fallos con las que se decidieron

las mismas, como puede constatarse en las sentencias STC 74288-39-347-2029-37930 17; STC 14144-56-314-2031-15101; STC 44985-94-523-2004-79100 18; STC 35181-42-452-2018-74532 18; STC 13965—20 18; STC 809—2019; STC 3328—20 19; STC 7848—20 19; STC 9546—20 19; STC 13893—20 19; STC 67537-69-979-2020-89889; STC 72860-75-118-2024-75312; STC 31467-74-199-2005-41051; STC 99818-49-218-2031-96161; STC 6539-

2020; STC 71158-56-222-2027-69879; y STC 7 87082-63-335-2006-86215, entre muchas otras.

En tiempo muy próximo, de forma unánime, la Sala

reiteró su postura en los fallos STC 005, STC 368, STC 713, STC 882, STC 1738, STC 2846, STC 2963 STC 3 179 y STC

387 todos del presente año (2021), sin perjuicio, claro está, de la vigencia del artículo 14 del Decreto 806 de 2020, mediante el cual se estableció la sustentación escrita de la apelación, modificación adoptada como medida de emergencia para ayudar a conjurar la crisis generada por la pandemia provocada por el virus covid- 19, norma no aplicable en este caso.

Precisamente, en la STC 2963 del 24 de marzo último, se expresó:

(...) Focnnte o fa pretensión yubyidiaria, relativa a tener por yuntentada la apelación en cuestión, ante loy nrsumentos que esbozó el actor en priinera instnncio, la iniyina no resulted de recibo, pueB, en repetidao ocayoniey, eyta Sala ha adoctrinado que la ■u iidamentación debe e{ectuarye ante el superior.

In citnnto n ■o discurrido, eyta Corporación ha ey■rimido:

‘(...) ■D] óndofe un sentido integral al artículo 322 de [Juan Sebastián Ocampo Vélez del Proceso], se tiene que de ncuerdo a yu numeral

1°, cunndo la prOvidencin se emite en el c:uno de unn nudiencin o diligencia, la apelación «deberá interponerse en forma verbal inmedintnmente después de pronunciada», n lo que seguidamente indicn que de todos loy recuryoB presentados, al final de la nudiencin el)uez «resolverá yobre la procedencia (...) ayí no Qnyynn sido ouztentados» (...).'

‘(...) Significa lo anterior que una ey la ocasión para interponer el recurso que indudablemente en «inmediatamente después de pronunciadas, lo c:onal da lugar a que se verifique el requisito tempestiuo, q otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que trotóndose de sentencias presenta una estructura compleja, segúrt la cual la sustentación debe presentarse {rente al a quo ¿ luego ser zfeszzrrolfocfo •ante el superior», cort/orme lo corttempfort tos incisos 2° y 3° del numeral 3 del cftocfo cnrion Gflfl (. . .) ’ (se destaca).

‘(...) Un tal sentido, el segundo de los apontados de la preceptiva en citn establece: «al momento de interponer el recurso en la nuñtencin, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a Sin finalización o a la noti cnctón de la que hubiere oido dictndn por fuera de audiencia, deberá precisar, de mnnern breve, los reparos concretos que le hnce n la decisión, yobre los cuales veTyará la sustanciación que hará nate el S;uperior• (...).'

De lo consi9nndo en el canon 222 ídem, ye desprenden diferencias en torno a la npeloción de autos y yentenciay, aspecto yobre el cual esta Sala unónimemente, expu S:o:

‘(. . .) a) Para los primeros, el legislador previó dos momentos, uno relativo a la interposición del recurso, el cual ocurre en a£tdiencin yi la providencia ye dictó en ella o, de niro de los trey (3) días Biguientey a ía noti cución de la decisión controvestida si :Se profirió jem de aquélla; y, dos, la suetentación, siendo vinbfe ésta en iqunf lapso al referido si el proueído no ye emitió en nudiencin o nf momento de incoarye en la respectiva diligencia, todo lo cual se serte nnte el)uez de primera instnncin (...).'

‘(...) b) Eu cuanto o dos segundos, el remedio vertical coruprende tres etapas, esto es, (i) su interpostciórt q (ii) lo formulación de reparos concretos, éytas nnte el a quo, y (iit) la sustentación quecorresponde a la exposición de las test Si o nr9umentos encnminndos a quebrar la decisión, con/orme a loy reparos que en su oportunidad ye forinuíaro u contra fct providencia cuestionada. DiclfoB actoy 8e Burten dependiendo, igualmente, de yi el fallo ye er tte en audiencia o fuera de ella, tal como arriba Be expuyo (...)’ (énfasis extextoJ.

!Se infiere, entonces, que, tratándose de autoy, eyta Colegiatura ma identificado corno fases del recurso de apelación, en pritrtta instancia: interposición del recurso, sustentación, trazlady de rigor y concesión; y, en segunda: la inndmisiñ o decisión. Para los .fallo•, en primera instancia: interposictón, formu/nctón de los reparos concretos y concesión; y, en seguricfn: odmistón o inadmisión con su ejecutoria, fijación de audiencia con la euentuni fnse probatoria, sctstentación oral y fallo.

Se sigue de todo lo hasta aqui expuesto, que las facultades que tiene el superior, en tratándose de la apelación de sentencias, únicamente se extiende al contenido de los reparos concretos señalados en la fase de interposición de la alzada, oralmente en la respectiva audiencia o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Andrea Viviana Castillo Franco del Proceso, siempre y cuando que, ademas, ello es toral, hubiesen sido sustentados en la audiencia que, con ese fin y el de practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso, así como de proferir la sentencia de segunda instancia, practique el ad quem.

De alli se extracta que esta vedado al nd quem pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en los reparos concretos expresados por el censor contra la sentencia de primera instancia, como sobre aquellos reproches que, pese

Radicación n. 68551-50-598-2028-29954 -10-36634-95-346-2017-43849 4-00403 02

a haber sido indicados en esa primera etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente en la audiencia del artículo 327 del Código General de Proceso.

Precisamente la Corporación, en forma muy reciente, al desatar un cargo por incongruencia, expresó sobre cuáles son las posibilidades o facultades que asisten al superior en las apelaciones, concepto que pese a estar Zincado en el Código de María Alejandra Pineda Rojas, conserva plena validez: (...) Andrea Viviana Castillo Franco infiere del detallado recuento de los argumentos expueytoy por el Tribuno/, que viene de conyignarye, dichn autoridad ye ocupó de todos y cada uno de los Jndnmentos en los que el demandado soportó la apelación que propuso contrn ra sentencia de primera instnncin, independiente de que se comparta o no el análiiy que yobre elloy realizó, cuestión que no ey factible establecer en desarrollo del cargo auscultado, toda vez que mediante su formulación 8e de nunció la comisión de en error in procedendo, may no £tnO de juzgamiento.

Al respecto, debe jnrecisorse, además, que esos reproches cfefimítzzron la óróítzr cfe acción del ad quem, ert tartto que de eonforzntdad con ef artí◀m•lo 35? del Código de Carlos Andrés Mejía Salazar ti, 'el supeifior zto podrá erinertcfor la prowzfertcio est la parte que rto rece ob)eto del recurso' (...)

dado que el ad quem no tiene más poderes que foo que le lra asipnndo el recurrente, pues no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la senfencin que no Ann sido impugnaday por la alzada, puesto que se trata de puntoy que escapan a lo que es materia del ataque, a no yer 'que en rozón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla' (CX, XC del 12 de febrero de 2002, Rad. ti.º ó Tó2; se subraya} (C SJ, SC 294 del 15 de febrero de 2021, Rad. n.º 25589-81-526-2017-10433 1; negrillas fuera del texto).

Es por consiguiente, rotundo fracaso del cuestionamiento examinado, pues como lo puso de presente el propio recurrente, la razón por la cual el Tribunal no se pronunció sobre las causales de nulidad del testamento que especificó al inicio de la acusación -(i) no haber indicado la nacionalidad del testador; (ii) ni el domicilio de la testlgo instrumental Andrea Viviana Castillo Franco; y (iii) no estar rubricado por dos testigos domiciliados en el lugar de su otorgamiento- fue que los reparos concretos relacionados con ellas, planteados por el apelante al momento de la interposición de la alzada, no fueron sustentados en la audiencia realizada con fundamento en el artículo 327 del Código General del Proceso, como quiera que la argumentación del impugnante se circunscribió a desarrollar unicamente los puntos tocantes con que esa memoria testamentaria no reflejaba la verdadera voluntad de su autor y que el testigo Carlos Andrés Mejía Salazar estaba inhabilitado para fungir como tal.

fi ello fue así, como em efecto aconteció, mal puede calificarse la abstenciõrr del ad quem de pronunciarse sobre esos fundamentos de la nulidad deprecada en la demanda, como violación al principio de congruencia de los fallos judiciales, pues lo cierto es que carecia de competencia para hacerlo, en tanto que esas inconformidades no fueron sustentadas ante él, sin que resulte admisible la postura del censor, consistente en que el cumplimíento de ese deber se atendió con el escrito que, en nombre de los actores, presentó ante el a quo dentro de los tres días siguientes a la audiencia en la

que emitió su fallo, pues como quedó explicado con amplitud, la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias dictadas en primera instancia, debe efectuarse ante el superior, en forma oral y dentro de la audiencia de “sustentación y fallo”.

El cargo auscultado, por tanto, naufraga.

CARRERQUINTO

Fincado en la causal segunda de casación, se atribuyó a la sentencia del Tribunal ser indirectamente violatoria de los artículos 1608, numeral 14, 1037, 1083, subrogado por el 11 de la Ley 95 de 1890, 1740, 1741 y 1742 del Código Civil, “como consecuencia de errores de hecho y de los testimonios que se tuvieron en cuenta en la apreciación de las pruebas, la demanda y su contestación”.

En desarrollo de la acusación, su proponente expuso que:

De entrada, las pruebas incorrectamente ponderadas fueron: la escritura pública 1604 del 22 de mayo de 2009, otorgada en la Juan Sebastián Ocampo Vélez de Medellín; el testimonio extraproceso rendido por Alexander de Juan Sebastián Ocampo Vélez; la demanda y las contestaciones de la misma, presentadas por CIUDAD DON BOSCO, el albacea testamentario Carlos Andrés Mejía Salazar y el accionado Juan Sebastián Ocampo Vélez; los testimonios de Julián Alberto Morales Ríos, Julián Alberto Morales Ríos, Julián Alberto Morales Ríos, Andrea Viviana Castillo Franco, Andrea Viviana Castillo Franco y

María Alejandra Pineda Rojas; y la certificación expedida por la doctora Carlos Andrés Mejía Salazar, en su condición de Julián Alberto Morales Ríos de Medellín.

Y que las preteridas corresponden a las siguientes: historia clínica del señor José Andrea Viviana Castillo Franco; fotografías de la Julián Alberto Morales Ríos de Medellín y de su parqueadero; la respuesta al oficio No. 533/ 2014/ 403 por parte de la precitada notaría; respuesta al oficio No. 212/ 2014/403 por parte de la Juan Sebastián Ocampo Vélez de la Nación; y las carpetas Nos. 3, 4, 5 y 6 “2014-000 OF ORDINARIO DE NULIDAD DE TESTAMENTO”.

A continuación trajo dos senderos al cargo: uno, que denominó “Df. TRSTALF2f2TØ Z2L£P£fG AØO M2 RKFL£ fA EA ULTf A VOMU2ITAD DNS CATfSA2fTR”; y el otro, que designó como “Z•4 I -tABIZrDAD DMZ TESTI A En MO ‘f’OVA”,

los cuales sustentó por separado.

2. En relación con el primero, apuntó:

Fue errado el entendimiento que el Tribunal hizo al estimar que, en pro de la acción, se adujo, como causal de nulidad del testamento, que éste no reflejaba la última voluntad de su otorgante, “pues que EL CORRECTO planteamiento conforme a la Veranda, las pruebas arrojadas, era que, comparada la cama para testar con la realidad, ésta no correspondía a la verdad, y por lo tanto, el acto no reflejaba la voluntad de Andrea Viviana Castillo Franco, teniendo el Juez que en el borde de la mente amplia y no restrictiva el tenía de la causal de nulidad realmente invocada, ya que al no existir una última voluntad que proteger, ninguna tragedia o gravedad conllevaba molar el testamento”.

Sentada esa premisa, pasó a demostrar la acusación, en desarrollo de lo cual, en síntesis, adujo:

Falta de apreciación, por una parte, del hecho

12. 1 de la demanda, en donde se indicó que el causante Carlos Andrés Mejía Salazar, al momento de su muerte, “cita de la ley de sus parientes más cercanos”, planteamiento que contradice la afirmación contenida en la memoria testamentaria, según la cual fue “causa para testar de esta forma, el beneficiario total de los bienes hereditarios;... {fl 1 vto c-1}”, y, por otra, de las respuestas que a ese específico fundamento fáctico dieron los demandados, que el censor reprodujo.

Al respecto, concluyó que “[e]s notorio a y a simple vista, conforme al contenido objetivo de la demanda y las contestaciones que efectivamente el hecho planteado no es que la parte actora estuviera invocando como causal de nulidad del testamento, que el mismo no reflejaba la última voluntad del causante, DINO que comparada la causa para testar con la realidad, esta no correspondía a la verdad, y por lo tanto, el acto no reflejaba la voluntad de Juan Sebastián Ocampo Vélez”.

Preterición de la historia clínica del señor Carlos Andrés Mejía Salazar, toda vez que en ella figura que el nombrado “fue acoipañado al médico por su sobrino Andrea Viviana Castillo Franco/ano J. 168 c-1}”, constatación que desmiente “el

abandono de su familia y por ende de) a su piyo el motivo que lo llevó a tentar como lo hizo”.

Desconocimiento de la prueba documental aportada por el testigo María Alejandra Pineda Rojas al momento de declarar, en cuatro carpetas corrtentivas de mas de 1.000 folios, “que NO PUDO obervar el Tribunal al no haber yião reriitiãoy por el p uez ãe primera instancia, documentoB ãe los ñniale y brota a ■o Esta ■n monutención del señor Carlos Andrés Mejía Salazar por parte de sus hernianoy, prueba que ãe ■iaber sião obyeruada por el fallador de Befunda instancia hitbiern deocubierto que efectivamente el testamento no podín re/ejnr fa uftima uoluntnd del testador, at queãar acreditado pfennmente con dichns pruebas, gate no eNstió el referido abandono a■ teytador por parte de buy hermanoy, ■ue es precisnmerte fa supriestn causa para testar”.

Ponderación parcial de los testimonios rendidos por los señores Carlos Andrés Mejía Salazar y Julián Alberto Morales Ríos, que el recurrente reprodujo en lo que estimó pertinente, como quiera que de su contenido objetivo se desprende “■ue ■os familiarey o/recinn mnnutención al señor Carlos Andrés Mejía Salazar, y que a pesar de ver el propietario unicnmente de una tercera parte del inmueble ubtcndo en el Municipio de Itagüí, usnbn, gozaba y diBfrutaba de dicho inmueble en su totalidaã, a yabiendasi que yuy doy ■iemianoz, eran iyunfntente propietarioy del miymo, siendo por tanto, notorio n simple viyta que NO EN CIERTO el nbndono total de los herinanos com el testator sin que la cauoa para testar corresponds a la realidaã y por tnnto no refie)a la ultimo voluntad del cauyante”.

S0

Ignorancia de las denuncias penales formuladas por el mencionado causante, “en una ocayión por hurto {fly. 44 a

49 c-) y en otra por fesiones peryonalez {fts 31 a 33 c-2}”, cuyo contenido “dezdibuja el motiuo del legado” dejado por aquél at señor Carlos Andrés Mejía Salazar, como quiera que acreditan que éste “mnftrnta[ba], nmenozn[ba}, hosti9a[ba] y roba[ba] n/ teytador”, dejando en claro que la compaiiia que el ultimo brindaba al primero, “más■ que agradable para ser premiada con un ■legado e[ra] bastnnte trauinãtica o desiagradable, al punto que, en nez be un premio ye S;olicitaba un cnstigo (. .) ”.

Omisión del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la persona jurídica accionada, particularmente, de las respuestas que dio a las preguntas dos y tres, en tanto que ellas dejan ver la sorpresa que le causó el legado establecido por María Alejandra Pineda Rojas en favor de CIUDAD DON BOSCO, derivada de que, “efectivianiente , al teytador no lo vincufnbn nadn especial con la institución para dejarle semejnnte fortuna”.

Al cierre de este primer segmento de la acusación, el recurrente puso de presente la trascendencia de los errores denunciados, como quiera que, segLin é1, de no haberlos cometido el Tribunal, dicha autoridad habría “encontrndo probado (...l, que el testamento impugnado no refleja la ultinia voluntad de■ cauyante y de esta mnnern [hubiese pasado] a tratar de nianera nmpfin y no con eytritez ■a cansal de nu/ida6f consistente en la inhabilidad del teytiQo Julián Alberto Morales Ríos”, tras lo cual repitió que para ello se imponía a esa Corporación tener “como criterio que no exiytía use uftima voluntad que proteger, y por tanto, ninpunn tragedia acarreaba anular el testamento”.

La segunda acusación, relacionada con la inhabilidad del testigo Julián Alberto Morales Ríos, el recurrente, tras advertir la aducción de diversos fundamentos jurídicos y jurisprudenciales por parte del Tribunal para negar su configuración, la soportó en los planteamientos que enseguida se condensan: La desestimación que de dicha inhabilidad efectuó el ad quem, fue conseciiencia de los manifiestos yerros fãcticos cometidos por esa autoridad al apreciar el material probatorio, como quiera que su coritenido objetivo dejó acreditado que la relación que existiõ entre el referido señor y la titular de la Andrea Viviana Castillo Franco de Medellín, no se redujo a iina simple autorización para que aquél cuidara los vehiculos dejados en el parqueadero de ese establecimiento, sino que implicõ la dependencia econõmica y personal de primero a la segunda, de modo que era esta ultima quien lo autorizaba “para yer testigo teytamentario, (... realizar di■igenciay relacionadao con la notnrín y lay que no”, amen que la vigilancia de automotores “no era su untcn Jnciõn, pueo tmmbièn we desempeñabn conio testigo testamentnrio entre otray, todo ello, conyituyéndolo en testigo inhibit

(art. 1 OÖ8 numeral 12 C.C.).”.

Atribuyó al sentenciador de segunda instancia, la comisión de los siguientes errores:

Cercenó la declaración extraproceso rendida por el señor María Alejandra Pineda Rojas, que el recurrente reprodujo en lo que estimó pertinente, y de la que infirió la demostración de:

La dependencia económica del nombrado respecto de la Julián Alberto Morales Ríos de Medellín, puesto que para la realización de su trabajo requería que abrieran y cerraran el parqueadero; fue la última quien determinó la remuneración que percibía (propinas voluntarias); y quien lo autorizaba para servir como testigo testamentario, impidiéndole cobrar por ello, sin perjuicio de que el interesado, notu propio, le diera alguna suma de dinero.

La dependencia y subordinación para desempeñarse como testigo testamentario y para realizar cualquier otra diligencia relacionada con la notaría, habida cuenta que, como ya se registró, con esos fines, debía mediar siempre la autorización de la titular de ese establecimiento, siendo notoria la falta de autonomía del señor Montoya.

La dependencia personal, pues para rendir dicha declaración extraproceso requirió el anotado permiso, lo que “impftcn fatalmente que el testigo eat a limitado ■msta para dar fe en el futuro de todasi lay diyponicioney teytameritariay que preoencia en la ■n]otnrín y para dar fe acerca de lay fomialidadey ãe la celebración ãe low misinoz, puey para hncerfo re■uiere de la nutoriznción que le otorgue fa Jncionorín que nutorizó el testamento, de lo contrario no lo ■iace y precisaaieute eyto lo conuierte en dependiente Tel notnrío y en testigo inhibit”.

Mutiló la declaración rendida por la doctora Juan Sebastián Ocampo Vélez y la confesión de CIUDAD DON BOSCO, contenida en la respuesta que dio al hecho noveno de la demanda, pues se de esos elementos de juicio se desprende que “rna de ■asi funcionez o fnborHs Wbituales o recurrente[s] del Mr. ñfontoyñ en yer testigo teytamentario en la notaría 20”.

Tergiversó el contenido de la certificación expedida por la doctora Andrea Viviana Castillo Franco, en su condición de Carlos Andrés Mejía Salazar de Medellín, como quiera la misma simplemente dio cuenta de que “no ze encontró en los nfChivos prueba ahuna ãe uínculo labora■ entre loy anteceyorey notnríos y el yeñor Alexander ñfontoyñ”, documento que de haber sido valorado correctamente hubiese conducido a concluir que, no siendo de esa naturaleza el referido nexo, “In dependencín” del segundo era “mós eridente”, pues hacía mas fácil a los titulares de la indicada oficina de “deS;pac■iar” al subordinado y de @rínrfo de yu ingreso económtco”, sin que éste pudiera “arroparye ba)o fos derec■ms labora■ey tan protegidoñ legal y constitucionnlmente hoy en día, r ññ por la cual ey la propia urisprudencia de la H. Corte que conzidera como hóbi■es part ver testigos testamentarios a ños traba)adores del testador o de six corísorte, pues la subordinación del traba)ador que ert otras épocas se predicaba, holy en día est■à] descartada por el teveno que legaì j j jurisprudencialmerite gonon cada día los traba)adores”.

Apreció parcialmente los testimonios de Julián Alberto Morales Ríos y María Alejandra Pineda Rojas, pues de haberlos ponderado completamente, habría “dado por acreditada la dependencia personal del Mr. Montoya con la Notaría”, a quien

Radicación n. 21206-46-428-2014-53774 1- 10 002 66424-74-128-2008-23728

debía pedir permiso para “dar nua entre uiyta escrita” y cumplir con c:rias judiciales”.

Soslayó las fotografías de la Carlos Andrés Mejía Salazar de Medellín y de su parqueadero, obrante en los folios 232 a 234 del cuaderno No. 1, con las que se acreditó que éste es “rna unidnd” de aquella y que, por lo mismo, no se trata de un espacio “aiylado yuoceptible de yer operado por cualquier tercero, sino que se trntn de unn dependencia de la Notaría al mundo de su respectivo titular”.

Pasó por alto la respuesta al oficio No. 533/2014/403 por parte de la María Alejandra Pineda Rojas de Medellín, con la que se aportó el contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona esa oficina, en el que “se eNdencin que ed parqueadero hacia parte del contrato”, circunstancia que conducía a admitir “que gates ostenta lu tenencia y cuidado ãel parqueadero es la Notaría 20 de Medeflín y [que,] por lo tnnto, toño lo relacionado con dicho espacio dependin” de ella.

Como en el caso de la primera acusación, el impugnante, al final, subrayó la trascendencia de los yerros endilgados al sentenciador de segunda instancia, pues fruto de ellos fue que negó la inhabilidad del señor María Alejandra Pineda Rojas para haber actuado como testigo en el testamento materia de

la acción.

Radicación n. 84363-70-604-2016-67662 -10-50696-16-805-2003-42161

CARDESEXTO

Con invocación de la primera de las causales de casación, se denunció la sentencia confundida por ser directamente violatoria de los artículos 1068, numeral 14, 1037, 1083, subrogado por el 11 de la Ley 95 de 1890, y 1740 a 1742 del Andrea Viviana Castillo Franco, el primero por interpretación errónea y los restantes por falta de aplicación.

La censura se cimentó en los fundamentos seguidamente resumidos:

Para negar la nulidad del testamento solicitada en el escrito con el que se dio inicio al proceso, como consecuencia de la inhabilidad del testigo instrumental Carlos Andrés Mejía Salazar, el Tribunal estimó, respecto de la subordinación contemplada en el numeral 14 del artículo 1068 del Carlos Andrés Mejía Salazar, que debía corresponder a una “sujeción total a la autoridad del notario (vent. 1:19:21 a 1:20:20)” y, en sustento de ello, citó cuatro jurisprudencias que supuestamente avalaban su posición.

Así las cosas, el censor continuó con el estudio de cada uno de esos fallos, así:

Sobre el fechado el 4 de octubre de 1974, acotó que “no p[odía] interpretarse como lo hizo] el Tribunal, pues si una persona no puede ‘obrar con entera independencia en ninguno de sus actos’ sencillamente en incipit y la nulidad del testamento se presentaría no por el numeral II del art. 1068, sino por los arts. 1740 y 1741 del c.c., y es que los ejemplos que trae la jurisprudencia

Radicación n.º 05300-3 I- 10-12523-51-798-2009-30750 14-00403 02

son bastante dicentes pues todos los referidos con incapaces, el hijo no emancipado, el pupilo, el criado -en su momento- excepto el inferior que puede ser capaz, pero nuevo a incipit sino puede obrar con entera independencia”.

Respecto de la sentencia del 6 de octubre de 1942, expresó que “se refiere al esclavo frente al amo, o a personas que no puedan expresar consentimiento pleno, por la ‘completa’ dependencia tanto económica como personal que se traduce en un ‘obedecimiento completo y era completa dependencia y completo obedecimiento en cualquier tiempo no existen en personas capaces, ya que lo que se puede presentar es una dependencia tanto económica y/o personal y un cierto obedecimiento moderado, por lo tanto, no puede ser la auténtica interpretación del numeral 14 del art. 1068 del c.c.”.

En cuanto hace al proveído del 6 de noviembre de 1947, consideró que habla de que “el cofono o [al] principio no está ligado con un vínculo de dependencia alguno”, cuestión que “no da pauta para la interpretación” del numeral en comento.

Y, finalmente, en relación con la providencia del 13 de octubre de 2006, destacó que “descartó la subordinación laboral, como la dependencia a la que se refiere el #14 del art. 1068 del c.c., lo cual es absolutamente lógico, por las garantías laborales y constitucionales que hoy en día gozan los trabajadores”, que pueden hacer valer con acciones a su alcance, sin que resulte lógico interpretar que la inhabilidad a que se refiere esa norma exige “que la persona se encuentre en grado sumo al sometimiento y subordinación patronal a tal extremo que no le deje la posibilidad de independencia y autodeterminación,

pues que ello llevaría a una ausencia absoluta de consentimiento de la persona, lo cual es alejado de la norma y de los tiempos modernos, donde nadie está sometido de dicho modo”.

Con tales bases, tildó de “absolutamente descabellada y totalmente absurda” la interpretación que es la que efectuó del precepto sobre el que cerró su atención, cuando consideró que las pruebas del proceso y las aseveraciones de los actores “no evidencian que el testigo estuviera cometido y subordinado a la notaría, en grado tal que perdería su autonomía y capacidad de razonar y discernir, que no tuviera la posibilidad de independencia y autodeterminación, circunstancia que sería la única que lo inhabilitaría para ser testigo testamentario”, como quiera que “no se coincede ni con [la] más reciente y creativa jurisprudencia existente ni que pueda existir al respecto, pues no es posible la imposición de dicha Constitución de inhabilidad”, toda vez que “ninguna persona que se encuentre en las circunstancias de hecho por el fallador, se puede presentar en una notaría, y de hecho, no es necesario notarlo, ni testador, ni ninguna persona que permita su interposición, por tanto, la nulidad por esta causal sería leída muerta”.

En procura de desentrañar el verdadero significado del tantas veces citado numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, el recurrente puso de presente que los testigos testamentarios “son eyencialezes para doy erentos 1} a fur de que eycuchen law diypoyicioney del testamento y puedan daT fe de ellas en el futuro, en caso de controversin sobre su contenido y 2} para dar fe acerca de fas /ormnlidades de su celebrnción”.

Radicación n.º 82879-88-260-2017-81348- 10-28654-55-308-2003-95877

Con tal base precisó que, por ende, “son inhábiles los dependientes del notorio, cuondo Bu grado de subordinación, implique o afecte, de manera neqotiun yo nutonomtn y de allt su credibilidad, por lo tonto, su un frente al miymo dudas; razonables sobre yu imparcialidad e independencia a la Ímra de dnr je yobre las disposiciones teytanientarias; o acerca de las formalidades de yu celebración, pues la nusencin de imparcialidad no brinda la garantía su ciento ni al testador, ni a loy futuros interesados en el testamento, lo que generaría uno nulidad del miyrzio”.

Especificó que, por la naturaleza de la causal invocada en el cargo, “no se discuten las conclusiones probntoríns a lay cuales llegó el sentenciador de segundo grado, yegun faz cuales el testigo María Alejandra Pineda Rojas: {nj em el ri9ifnnte del parqueadero de la notaría 2O, (b) tenía que pedir permiso a la notnrin para ir a declarar anticipadamente, (c) era testigo en otroy tesitarnentoy otorgados en la notnrín 20 y (d) tentn que pedir permiso para realizar dtfigencín[s] que t[uviesen] que ver con la notnna (set. 01:29:22 a Ol:NO:39) y no Sue controvierten, por cuanto con Jndnmento en los interinos hechos que encontró probados, con ann adecuada interpretación del numeral 14 del art. 1068 del c.c., lfernrfnn a que el juez declarara la nulidad del testamento”.

Para terminar, explicó la forma como resultaron vulnerados los preceptos sustanciales indicados al inicio del carQO.

CONSIDERACIONES

Patente es la interrelación, en primer lugar, de los dos segmentos que integran el cargo quinto, como quiera que

con el inicial, el censor buscó que se hiciera una interpretación más flexible del criterio para aplicar la inhabilidad de que trata el ultimo; y en segundo término, de esa acusación con el cargo sexto, en tanto que con este reproche final, el censor controvirtió el sentido que el Tribunal le dio, precisamente, al numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, contentivo de la referida inhabilidad predicada respecto del testigo Juan Sebastián Ocampo Vélez.

Ello explica la conjunción de las indicadas censuras, de modo que, como se vera, argumentos comunes y, sobre todo, conexos, servirán para su despacho negativo.

Eu cuanto hace al reproche con el que se aperturó el cargo quinto, son pertinentes las siguientes apreciaciones:

No es cierto que el Tribunal hubiese colegido que una de las causales invocadas para que se decretara la nulidad del testamento otorgado por el señor Juan Sebastián Ocampo Vélez (q.e.p.d.), consistió en que dicha memoria no reflejaba su verdadera voluntad.

La conclusión de esa autoridad al respecto fue exactamente la contraria, esto es, que esa circunstancia no se adujo como motivo de la invalidación sustancial sobre la que versó la acción.

Ello, por si solo, desvirtúa 1os reproches en los que se sustentó la acusación en este momento examinada.

Ahora bien, que el sentenciador de segunda instancia hubiese llegado a esa conclusión, obedeció a que uno de los reparos concretos que la parte actora formuló en contra de la sentencia del ri quo y que luego desarrolló en la sustentación de la alzada fue precisamente ese, esto es, que se pasó por alto que la memoria testamentaria no expresaba el genuino querer de su otorgante.

Sobre el particular, debe apuntarse que, si bien es verdad, al momento de la interposición del referido recurso vertical, esa queja no fue esgrimida, como quiera que la inconformidad expresada por el apoderado de los actores se cimentó ínicamente en la falta de indicación de la nación del testador, la omisión del domicilio de la testigo María Alejandra Pineda Rojas, el incumplimiento de la exigencia de que por lo menos dos de los testigos estuvieran domiciliados en el lugar de otorgamiento de1 testamento y la inhabilidad del testigo Juan Sebastián Ocampo Vélez (audio contenido en el CD obrante en el folio 268 del cuaderno No. 1), en el escrito que presentó posteriormente con base en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, señaló como tal que “2º SE

TUVO UN CtiKRPA QUE ML TESTADOS IMrU NADO >O R r A U Ti VO U AD D CA£fSt42¥TE Y POR GOLD, SE DEBE ABRfT PASSO A LAN CA£fSA£ S DE NULIDAD” (fls. 4 a 15, cd. 3).

En relación con esa inconformidad, los recurrentes, en e1 indicado memorial y en la audiencia de sustentación de la alzada (CD, fl. 23, cd. 3), explicaron con amplitud, en síntesis, que las causas expresadas por el testador para disponer de los

bienes en la forma como lo hizo, es decir, el presunto abandono de sus hermanos y que quien lo venía acompañando era el señor Carlos Andrés Mejía Salazar, no corresponden a la realidad, pues aquellos velaron por su sostenimiento y el ultimo delinquiró en su contra.

Es del caso insistir, entonces, en que fue debido a esa alegación de los apelantes, que el Tribunal abordó el estudio de la misma y que, sobre ella, luego de poner de presente el deber de congruencia de los fallos judiciales, según las previsiones de los numerales 1º y 4º del artículo 281 del Código General del Proceso, concluyó en ultimas:

En la deinanda, äebiéndolo hncer ally, como lo exige ■a norma aludiäa, por ser hecho acaeoião a rites ãe preBentarla, loy apelanteo no a■egaron que el tesitamento no refleja la ñtima voluntad de Uooé Vicen■e Me’fa Arango. En loy nunierales 3 a 1 1 äel acápite de los ■ieci■ios, afirinaron que adolece de requiyitoo forniales y en el decinioyegundo aludieron a lay extraíiay circuristancias en la que falleció el teztador, y lay nÇrmnciones que ye hicieron en el ultimo no equivalen a lo dicho, ey äecir, a que el testnmeritto no refleja la ultima vofuntnd de Carlos Andrés Mejía Salazar Man9o, ni yiqoiera lo nugieren (se subraya).

Deviene como algo ostensible, por lo tanto, que con dichos razonamientos, e1 ad quem resolvió uno de los dos aspectos de la apelación a 1os que circunscribió su fallo, por haber sido propuesto como reparo concreto contra la sentencia de primera instancia y sustentado luego en la audiencia del artículo 327 del Andrea Viviana Castillo Franco del Proceso, sin que, al pronunciarse de esa manera, estuviere desatando algún

extremo, propiamente dicho, de la acción o de las defensas esgrimidas por los demandados.

Puestas las cosas en ese contexto, como tiene que ser, se impone colegir que el mencionado juzgador no pudo cometer los yerros fácticos que el censor le endilgó en este segmento de la censura, consistentes en la indebida apreciación de la demanda, las contestaciones de la misma y las pruebas especificadas por el impugnante, habida cuenta que aquél, al descartar que el aludido motivo hubiese sido una de las causales de nulidad testamentaria invocadas, llegó hasta allí y se abstuvo de continuar con su examen, sin que lo resolviera en el fondo, so pena de hacer incongruente se fallo.

Asi las cosas, ninguna razón se encuentra a la prédica del recorrente, relativa a que como, seguiu su decir, la memoria testamentaria era inexistente, en la medida que no reflejaba la verdadera voluntad del señor María Alejandra Pineda Rojas (q.e.p.d.), los criterios para definir sobre la invalidación de la misma debían flexibilizarse, pues “no eNsttn atum última voltntnd que proteger” y, por lo mismo, “ninguna tragedia acarreaba anular el testamento”.

Naufraga el cuestionamiento con anterioridad analizado.

Pasa la Sala a ocuparse de1 cargo sexto, como quiera que, mediante é1, seguiu ya se detalló, el censor criticó el entendimiento que el Tribunal le dio a la inhabilidad prevista en el numeral 14 de artículo 1068 de1 Carlos Andrés Mejía Salazar, cuestión

que resulta necesaria explorar antes de asumir el examen del aspecto factico de la misma, tratada en la segunda acusación del cargo quinto.

Tal y como se registró al hacerse el compendio de la sentencia del Tribunal, dicha autoridad, previamente a estudiar la reseñada inhabilidad imputada al testigo instrumental Carlos Andrés Mejía Salazar, sentó como premisa jurídica que, en tratándose de la nulidad testamentaria, el criterio de aplicación de las causales que pueden conducir a ese resultado debe ser siempre estricto, por la gravedad que implica dejar sin efectos la ultima voluntad de quien ya ha fallecido y, por ende, no puede defender la disposición que hizo de sus bienes, análisis al que llegó con apoyo en los proveídos de esta Sala de la Corte fechados el 24 de junio de 1997 y 13 de octubre de 2006.

De1 primero de esos fallos, el ad quem reprodujo buena del siguiente segmento:

A: Sí, la Corte la expresado desde uie)a data, en relación con el régimen de las nu/idodes, que yiendo el testamento un acto solemne (art. 1055 C.C.), la ley fija y determina el modo de otorgarí y sanciona con nulidad (art. 11 de la ley 9G de 1890), ya por defecto de fondo o de forma, el acto testamentnrío;

pero que '...stendo Iris nulidades de cnrócter toxntiuo 9 teniendo en cuenta las graves consecuencias que acarrea la declaración de nulidad de un testamento, el legislador en texto expreso ha modificado el rigor de los antiguos principios y la jurisprudencia y orienta hacia un criterio de amplitud, dentro del estrecho círculo constituido por la ley al respecto. Como lo anotó el expositor, es con verdadera repugnancia como se llega en algunos casos a decretar la nulidad de un testamento, especialmente cuando están intactos y siendo inobjetable los

elementos o factores de fondo, únicamente se ataca el acto por errores u omisiones de forma. Es así por vía de excepción que se decreta la nulidad de un acto testamentario, porque en muchas ocasiones la voluntad y el querer del testador rectamente expresados, quedan sin eficacia y hasta burlados. Carlos Andrés Mejía Salazar trata de un acto contractual, y se refiere a la nulidad, o sobre el alcance de las cláusulas del pacto, los mismos contratantes se presentan al juicio ya para defender sus puntos de vista, ya para explicar, ayudados de otros

factores, el sentido de las cláusulas tachadas de oscuras o vagas. Y esto no sucede en tratándose de un testamento, por lo mínimo que quien lo otorgó es totalmente ajeno al debate. La trascendencia que engendra la nulidad de un testamento es con rectitud mayor que la que engendra la nulidad de un

contrato' (LUI, pág. 288; LXX VI, pág. 62). Y que, por tanto, en materia de nulidades, especialmente en lo referente a los testamentos, '...el criterio debe ser siempre restricto y jamás de nulación, por lo grave que es dejar, sin fundamentos muy sólidos y sin razones muy evidentes, inoperante la última voluntad del testador. ...' (LIV, bis, pág. 158).

Y del segundo, trajo a colación el penúltimo párrafo de las apreciaciones que pasan a transcribirse: (...). El testamento, como acto unipersonal por medio del cual el testador ordena la distribución total o parcial de sus bienes a través de disposiciones cuyo efecto y se difieren para después de su fallecimiento, exige para perfeccionarlo la observancia de ciertas solemnidades, según la especie o circunstancias concurrentes en el momento, sin las cuales racteró con efectos que a la postre condujeron a la nulidad. En tratándose del abierto, nuncupativo o público, es decir, aquel en que el disponente hace sabedores de sus determinaciones con los comparecientes al acto, debe extenderse por escrito, y si existe notario ante éste y tres testigos, o ante cinco, si en el lugar no existiere notario. En torno a la estrictez con que debe procederse en este tema, ha expresado la Corte que 'en materia de nulidades, y especialmente en las referentes a los testamentos, el criterio debe ser siempre restricto y jamás de nulación, por lo grave que es dejar, sin fundamento muy sólido y sin razones muy evidentes, inoperante la última voluntad del testador' (G.J. t. LIV bis, pag. 15T; LXXIV, pag. 306 y CXIII, pag. 108).

Es evidente, entonces, que el propósito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firme y cumplida ejecución de la última voluntad de quien decide disponer de sus bienes mediante uno de sus formas testamentarias preestablecidas; por esta razón, únicamente son susceptibles de invalidarse los actos solemnes de aquella especie respecto de los cuales se demuestre en forma fehaciente la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren alguna de las precisas y concretas causas de nulidad contempladas en el ordenamiento positivo, y no cualquier otro vicio o irregularidad.

En embargo, en orden a mantener razonablemente la voluntad posterior del testador, la doctrina jurisprudencial de la Corporación viene propendiendo por atenuar la severidad de los antiguos y principios atinentes a los requisitos formales, para dar cabida a conceptos más amplios y que conduzcan a reducir la incidencia de las manifestaciones expresadas por el disponente.

La antedicha consideración de la Corporación sentenciadora, sustentada de la manera que se deja señalada, de estricta naturaleza jurídica, se reitera, no fue combatida por el recurrente, quien, como igualmente se consignó al extractarse la esencia de las acusaciones en estudio, limitó su ataque a cuestionar, por una parte, el entendimiento que ese colegiado hizo del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil (cargo sexto) y, por otra, el análisis que realizó de las pruebas relacionadas con la demostración, a su parecer, de la dependencia económica y personal del señor Andrea Viviana Castillo Franco en relación con quien, para la época del testamento controvertido, se desempeñaba como Julián Alberto Morales Ríos de Medellín (segunda parte del cargo quinto).

De suyo, entonces, la referida apreciación se mantiene err pie y, por lo tanto, sigue brindando apoyo a la sentencia impugnada, resultando, como es obvio, intangible para la Corte, de lo que se sigue que ella habrá de orientar la revisión del análisis que hizo el ad cyiem de la inhabilidad prevista en el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil.

Por su importancia, por contener un análisis jurisprudencial retrospectivo sobre la materia y por ser el mas reciente fallo relacionado con la correcta interpretación de la precitada norma, resulta apropiado transcribir in extenso el siguiente pronunciamiento de la Sala:

(...) Sobre esta temática results conveniente reproduCir, incfuso a eypacio, loy siguienty pronunciamientoy de eyta Corporación, en la medida que elloy iluotran yu poytura, frente al conientado precepto.

(...) En sentencia de 24 de junio de 199T (Rad. 4605), la Mala, de un lado, reyeñó law providenoia y en las que hobín interpretn do el numeral 14 del artículo 1068 del Julián Alberto Morales Ríos con anterioridad g, por Otra, refrendó tal poytura, proveiã que, coino ye aprecia, ee posterior a la entrnda en uiyencta de la Andrea Viviana Castillo Franco de 1991.

SosLu uo la Corte:

Y at ocuparse de la inhabilidad que consagra el numeral 14 del artículo 1068 del Andrea Viviana Castillo Franco/ que prohíbe, entre otras personas, a low dependientes o domésticos del testator, ser testigo del testamento, esta Corporación tmmbien ha expnesado, desde hnce muc■ioz años, que para que exists la dependencia ãe que trata dtcho precepto, o sea '...para que un individuo esté su)eto a la autoridad de otro, es preciso que aquól esté de tal modo subordinado a éyte, que no pueda obrar con entera independencia en ninguno de sus netos, como sucede uerbi gratia con el poder que ejerce el padre sobre los hijos no emancipados, el del tutor sobre el pupilo, el del superior sobre los inferiores, y el amo sobre el criado. !Si esto no se entendiera así, resultaría que el número de personas que pudieran seruir de testigos en los testamentos sofemnes, quedaría muy restringido, pues en la sociedad el cambio constante y la constante sucesión de relaciones mutuns entre los osociodos, doce que ninguno de óstos goce de completa y verdadera independencia' (Cas. Cin. de 31 de agosto de 1893, G.U. Tomo W, pág. 9). Luego, tutelando la anterior doctrina, la Corte repitió que 'No ey c:ualquier dejoendencia la que inhibe pam ser testigo de un testamento, porque de zeT a: Sí lay cosns,

;j dada la complejidad de las relaciones económtcas octunfes, el sistema de hecho de interdependencia que ce destaca en ese orden, la inhibición de que se hu hecho mérito, y que es uno excepción, uendrín n trocarye en una regla con graae perjuicio general. La inhnbifidnd, por lo tanto, n que ye refiere tal norma no puede ser otra sino la que provenga de una comjoleta dependencia económica y hasta personal, que se trnduzcn en un obedecimiento completo, por esn rcizón, a los órdenes del amo' (Cas. Cin. de Ó de octubre de 1942, G.J. Tomo LIV, bis, pág. 158). Posteriormente, la Corte puntualizó que ef cofono aparcero tampoco ze encontraba comjorendido en la inhabilidad pum ser testigo de que trata el numeral 14 del artículo 1068 del Julián Alberto Morales Ríos, '...dado la deJntción que trae el Diccionnno de la Academia de la palabra dependiente, pues el aparcero no eytá ligado con vínculo nfyirino de dependencia, sea de autoridad o de subordinación económica con el testador, desde fueyo que entre los dos lo que existe es un contrato (LXXIII, PÁG. 100). Y después, bajo los auspicios de los anteriores criterioy, también dijo esta Corporación que '...el carácter de socio, así sea industrial o cnpitnfista, descarta QOr completo la subordinación o (alta de nutonomín que nm persona puede tener respecto de otra y que son esenctnfes para que pueda hablarse de dependencia o doméstico para los efectos de la inhnbifidnd que establece el mentndo numeral 14 del artículo 1068. No hnbntendo ni fu unn ni la otra, desaparece la inhabilidad que consagra ese texto legal para seruir corno testigo de urr testomerito (Cns. Cia. de 4 de marzo de 19T4, G.U. CXLVIII, póg. T4).

Más ndefnnte observó:

Los citas jurieprudencialey que anteceden constituyen sóftdo testimonio de la conducta permanente adoptada por esta Corporación en el sentido de que no bostn, como lo pretenden lay recurrentes, que la inhnbifidnd para infevenir como testigo en un testamento se mide con la yola prueba de la subordnnctón jurídica que exista entre ónte y el testador, sino que es necesario nreriguor hasta quó punto dicho relación o vincufnción carconie la capacidad rofitivn del dependiente, con

fuerza suficiente para determinar la nulidad del respectivo testamento, regla que no se deteriora ni siquiera en presencia de una relación laboral, como acontece en el presente caso, pues aunque es indiscutible que la subordinación es de la esencia de funciones de tal naturaleza, no puede afirmarse con la misma certeza que todo empleado sometido al régimen de subordinación es, en mérito de ese sólo hecho, dependiente de su empleador, pues si así lo fuere, todo empleado por sola razón de serlo, sería inhábil para los efectos aquí investigados, conclusión que la Corte ha condenado en virtud de las poderosas razones de orden legal y social expuestas en los distintos fallos aquí reproducidos parcialmente, y que en la actualidad cobran singular importancia si se tiene en cuenta que la legislación laboral imperante en el país desde hace algo más de medio siglo, ha tenido procurando, además de sus fines de higiene social, por asegurar la independencia económica y moral del trabajador, sin desmedro de las exigencias laborales de la empresa, sustrayendo de la influencia excesiva del empleador aquellas condiciones de vida que se repitan sustanciales para la dignidad humana del trabajador. Por tal razón se ha hecho menester indagar si un empleado subordinado es o no, independiente del empleador, pues éste lo será o no, según los hechos lo determinen.

(...) De manera que, en resumen, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que el numeral 14 del artículo 1068 del Código de Procedimiento Civil no contempla la inhabilidad del empleado, por ser tal, sino la del dependiente o doméstico, por cuanto la situación actual del trabajador frente a la del empleador, si bien es de subordinación no es de dependencia, como tal en testigo idóneo, no solamente puede declarar en juicio, sino aun por intervenir en el otorgamiento de un testamento solemnizado por su empleador, como lo es el del testamento; la vinculación jurídica del empleado u obrero con el empleador ciertamente aparece, por sí sola, la subordinación. Pero no la dependencia. Y el que revoque esta, debe probarla, desde luego, por otros motivos que no sean propiamente la condición de empleado u obrero.

(...) Con posterioridad, la Corte, se refiere sobre la validez de un testamento otorgado en el inciso final del artículo 1068 del Código de Procedimiento Civil -que exige que al menos dos «de los testigos deberán estar domiciliado y en el lugar en que se otorga el testamento»- señaló:

La prohibición, por lo tanto, en los términos del artículo 1068 del Código de Procedimiento Civil, para ser testigo testamentario, debe entenderse referida a quienes no pueden dar fe de las circunstancias que rodearon la confección del testamento, bien por motivos de incapacidad general o por presentar fallas sensoriales notorias, ya porque no obstante ser capaces para declarar, existen razones serias para dudar de su credibilidad, como el interés, el parentesco y la presión o estado de los testigos (CX XC, 26 Oct. C004, Rad. 4 77934-86-236-2020-82358 T-OI).

(...) V en sentencia de 12 de octubre de 2000, que fue la que guió el fallo del tribunal, se expuso: El testamento, como acto unipersonal por medio del cual el testador ordena la distribución de sus bienes en virtud de disposiciones cuyos efectos se difieren para después de su fallecimiento, exige para perfeccionarlo la observancia de ciertas solemnidades, según la especie o circunstancias concurrentes en el momento, sin las cuales no se produce con validez que a la postre conducirán a la nulidad. En tratándose del abierto, nuncupativo o público, en decir, aquel en que el disponente hace sabedores de sus determinaciones a los comparecientes al acto, debe extenderse por escrito, y si existe notario y tres testigos, o ante cinco, si en el lugar no existiere notario. En torno a la validez con que debe procederse en este caso, ha expresado la Corte que 'en materia de nulidades, y especialmente en las referentes a los testamentos, el criterio debe ser siempre restrictivo y no de ampliación, por lo grave que es dejar, sin fundamentos sólidos y sin razones muy evidentes, ineficaz la última voluntad del testador' (G.U. t. LIV bis, pag. 157; LXXIV, pag. 306 y CXIII, pag. 108).

Radicación n.º 05360-31-10-68534-31-959-2033-622410-14-74703-28-235-2034-53924

Es evidente, entonces, que el propósito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecución de la última voluntad de quien decide disponer de sus bienes mediante una de las formas testamentarias preestablecidas; por esa razón, únicamente son susceptibles de nulidad los actos solemnes de aquella especie respecto de los cuales se demuestre en forma fehaciente la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren en forma precisas y concretas causales de nulidad consagradas en el ordenamiento positivo, y no

cualquier otro vicio o irregularidad.

Sin embargo, en orden a mantener razonablemente la voluntad postrera del testador, la doctrina jurisprudencial de la Corporación viene propendiendo por atenuar la severidad de los antiguos principios atinentes a los requisitos formales, para dar cabida a conceptos más amplios que conduzcan a evitar la inercia y la burla de las manifestaciones expresadas por el disponente. Es así como, *verbi gratia*, la trascendencia que no tienen el domicilio de los testigos instrumentales no persiste hoy en día, al ser evidente que correspondía a una exigencia tendiente primordialmente a identificarlos o localizarlos cuando se requiera la necesidad de hacerlos comparecer a declarar dentro de una causa litigiosa, de suerte que ahora no tiene razón de ser, debido a la facilidad que la tecnología, los medios de comunicación y de transporte brindan para lograr tales objetivos, porque 'que la ley exija que dos de los testigos comparezcan en el lugar del testamento, esto no significa que quienes tienen domicilio en lugar distinto, son inhábiles para declarar, porque si se autoriza intemeris como tales a unos y otros, los domiciliados y los no domiciliados, debe predicarse que todos serían idóneos para ese propósito ... el domicilio de los testigos ha perdido su razón de ser ... la formalidad externa del testamento sobre que dos de tales testigos, a lo menos, tengan domicilio en el lugar en que se otorga, ha perdido su utilidad práctica, razón por la cual no tiene la virtud de aniquilarlo' (Sent. Cns. Civil de 20 de octubre de 2004, exp. C68OT93184001 4 47298-24-250-2023-61371 HT-01), (no publicándose aun oficialmente; reitera así la Corte esta precisión, tanto más si se considera que el derecho no está llamado a aniquilarse sino a evolucionar en forma armoniosa con las transformaciones sociales, extrayendo en cada caso el fin buscado por el legislador al consagrar los diversos hipótesis normativas.

No obstante, tal entendimiento no puede significar que la participación de los testigos instrumentales carezca de importancia, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en [los] artículos 1070, inciso i°, y 1071 del Código Civil, la presencia es esencial en el acto de otorgamiento del testamento, a fin de que escuchen las disposiciones del testador y puedan dar fe de ellas en el futuro, en caso de controversia sobre su contenido o acerca de las formalidades de su celebración.

(...) En cuanto a lo tocante con la pretendida invalidez del acto postrero de disposición de la señora Pótez Ramírez con asidero en la condición de doméstica de la testigo Julián Alberto Morales Ríos respecto de la asignataria María Alejandra Pineda Rojas, ha de notarse que frente a la misma el ad quem, siguiendo las directrices jurisprudenciales de esta Corporación, si bien consideró encontrarse acreditado, sin lugar a dudas, que para la época de su extensión, otorgamiento y autorización del documento notarial que recoge el testamento ciertamente se desempeñaba en tales labores, igualmente encontró que 'la subordinación laboral que aparece establecida en el plenario respecto de la testigo testamentaria, no vicia de nulidad el acto testamentario, puesto que no en esa la dependencia la que inhibe para ser testigo, sino el completo sometimiento o subordinación de una persona a otra, que se traduzca en un obediencia completa, ni los órdenes de su nexo, sometimiento éste que para nada se vislumbra en este caso, pues de las versiones rendidas en el expediente no se estableció que la relación /a/70Fcz/ entre la testigo y el señor RAQUEL TRUJILLO CAMACHO fue de tal envergadura que su capacidad cognitiva se encuentre afectada por ese grado de su subordinación o dependencia laboral'.

Según los considerandos, con ese entendimiento incurrió el Tribunal en error jurídico en la interpretación de los fallos invocados para sustentarlos, como quiera que, aunque con ellos se abordó el asunto de la nulidad testamentaria bajo la causal consagrada en el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, no era menos cierto que allí también se había puesto de presente el tema de la dependencia o subordinación del empleado en general, dejando por fuera el específico aspecto de los 'domésticos' cuyo solo enunciación, se sugiere, da por

Radicación n. 05360 31 10-95169-37-160-2024-67379 02

sentada la presencia de aquellos conceptos; fuera de lo anterior, sostienen que dejó de obervar que entre las características propias del empleado del servicio doméstico, se encuentra la de convivir y compartir permanentemente con el empleador o patrono, particularidad que, por lo demás, ya

efectivamente en el proceso.

Un este sentido es de advertir que, como así lo ha interpretado esta Sala en varias sentencias de casación (C.J. t. IX, pág. 9; LIV, bis, pág. 158; CCXLVI, pág. 1464, entre otras), el simple hecho de la subordinación laboral a la que pueda estar vinculado el testigo testamentario respecto de las personas mencionadas en el referido ordinal, no es suficiente para configurar la inhabilidad allí prevista, sino cuando esté sujeto en grado sumo al sometimiento y subordinación patronal, a tal extremo que no le quede posibilidad de independencia y autodeterminación, todo de conformidad con las circunstancias de cada evento, que por supuesto el juez ha de analizar con el detenimiento necesario; de ahí que pueda concluirse que eso fue precisamente lo que hizo el sen/encindor de segundo grado, pues no se limitó a acoger literalmente la causal de inhabilidad de la testigo Carlos Andrés Mejía Salazar, sino que, con base en el caudal probatorio, procedió a escrutar si esa restricción laboral restringía a tal punto la capacidad de libre actuación de la misma, aspecto que no encontró demostrado. (CX MSC, 13 Oct. 2000, Rad. 2000-000 12-01).

(...) Ninguna duda queda, por consiguiente, que el criterio recogido en esos fallos, fue el que adoptó el Tribunal respecto del numeral 14 del artículo 1068 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que, según se desprende de su sentencia, mirada en todo su contexto, y no fraccionadamente, dicha autoridad estimó que la configuración de la inhabilidad allí prevista solamente se daba en aquellos casos en los que, además de existir entre el testigo instrumental y el testador un vínculo contractual de línea laboral, tal relación, por sus características (actuales y propias, ha sido implicado, para aquél, tal nexo de dependencia que afectara negativamente su autonomía, por ende, su credibilidad; o, para éste, que el testamento por él otorgado, no [fuese] reflejo de su más sincera y pura voluntad (CSJ, SC 5798 del 9 de mayo de 2014, Rad. n.º 56274-60-662-2028-47763 1; se subraya).

Radicación n. 52378-23-991-2013-18825- 10 76381-50-714-2019-18153 02

Siguiendo la secuencia de los diversos pronunciamientos en los que la Sala se ha referido al alcance de la inhabilidad contemplada en el numeral 14 del artículo 1068 del Código de Procedimiento Civil, propio es notar que debido, precisamente, a los cambios sociales ocurridos con el paso del tiempo, si bien es verdad no puede, en los tiempos que corren, persistirse en la idea de un sometimiento extremo, que implique para “los dependientes o domésticos” a que se refiere el precepto, la imposibilidad de obrar en todos sus actos con autonomía y autodeterminación, si debe insistirse en la aplicación restrictiva del impedimento que se analiza y, por ende, que el vínculo entre el subordinado y el “testador”, “su conyorte” o el “familiar que autorice el testamento” debe ser de “dependencia” en grado tal que comprometa de manera real, no hipotética, su “capacidad de libre actuación” o, como lo apuntó la Sala en el precedente pronunciamiento, que afecte “negativamente su autonomía y, por ende, su credibilidad”.

En este orden de ideas, forzoso es colegir que en ningún error jurídico o, por lo menos, en uno protuberante, incurrió el Tribunal cuando estimó que “[el] artículo 1608 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 14, veda a los dependientes o domésticos del notario que lo autorice, entre otras personas que no pueden ser testigos [de] Un testamento nolemne, causal de inhabilidad que no se debe acoger literalmente, para entender que la que la genera es la subordinación, la sujeción total a la autoridad del notario”, esto es, la que determina que aquél “en ninguno de sus actos pueda obrar independientemente”, lo que significa “que cualquier dependencia de los testigos instrumentales respecto del

notario, no los torna ilegales y, por lo tanto, no priva de validez la memoria testamentaria” (se subraya).

De esa apreciación, conjuntada con la inferencia que el ad quem extrajo respecto del caso concreto sometido a su conocimiento, según la cual el vínculo que halló comprobado entre el testigo instrumental Carlos Andrés Mejía Salazar y la María Alejandra Pineda Rojas de Medellín, o si se quiere, como lo afirmó el recurrente, entre aquél y la titular de ese despacho para cuando se otorgó la escritura pública contentiva de la memoria testamentaria debitada en este asunto, no se desprendía que “fuese sometido y subordinado a la notaría, en grado tal que [le] privara su autonomía y capacidad de razonar y discernir”, ni que “no tuviese la posibilidad de independencia” (se subraya), se infiere que la idea propuesta por el sentenciador de segunda instancia sobre esa causal de inhabilidad guardó correspondencia con el estado actual de la

jurisprudencia, en tanto que giró sobre la base de la existencia de un nexo tal, que de forma importante incida en la capacidad de decidir y actuar del primero y que evidencie una significativa reducción o la supresión de su independencia y autonomía.

Por lo expuesto, el cargo sexto de la demanda de casación, no está llamado a prosperar.

Queda por ver la acusación contenida en la segunda parte del cargo quinto.

Para concluir que “nada evidencia que Alexander

Montoya fuera testigo instrumental del

testamento que otorgó Pierre Montoya”, el Tribunal empezó por destacar que los demandantes fundamentaron esa reclamación en que, “decide agosto de 2008, el propietario del parqueadero de la notaría” y, por ende, “dependiente” de la titular de la misma, a quien “otorgó el consentimiento para ir a declarar anticipadamente”, así como para servir de “testigo en otros testamentos otorgados por él” y “para realizar diligencias” relacionados con dicha oficina.

A continuación se ocupó de la declaración extraprocés rendida por el mismo señor Montoya, del testimonio recibido a la doctora María Alejandra Pineda Rojas, exasesora de la mencionada notaría y encargada de la misma en varias ocasiones, y de la certificación expedida por la doctora Julián Alberto Morales Ríos, Juan Sebastián Ocampo Vélez de Medellín al momento de su libramiento, y coligió que entre la titular de esa dependencia y el nombrado testigo instrumental “existió una relación, determinada por la autorización que ella le dio a él, (...) para cuidar en el parqueadero de la notaría los vehículos de las personas que acudían a ella”, vínculo que, a su turno, implicó que la primera “debe controlar lo que sucedía” en dicho lugar y, por lo tanto, si el segundo “estaba ejerciendo dicho cuidado o dejándolo de hacer”.

Añadió que esos “medios de prueba, al igual que las afirmaciones de uno de los demandantes, no evidencian que el testigo tuviera cometido y subordinado a la notaría en grado tal [que] anclara su autonomía y capacidad de razonar y discernir, que no tumere la posibilidad de independencia y objetividad”,

circunstancia que sería la más que lo inhabilitaría para ser testigo testamentario”.

Enseguida observó que “las declaraciones de Andrea Viviana Castillo Franco, investigador privado contratado por uno de los accionantes para acopiar pruebas sobre el asunto que hoy ocupa,” Francisco Javier Andrea Viviana Castillo Franco, hijo del demandante Andrea Viviana Castillo Franco, Carlos Andrés Mejía Salazar; María Juan Sebastián Ocampo Vélez y Andrea Viviana Castillo Franco, coinpanera sentimental e hijo, respectivamente, del accionante María Alejandra Pineda Rojas, al Pique tratan de sostener la dependencia alegada, basada sobre que efectivamente existió, porque nuxifundó por los antecedentes jurisprudenciales aludidos, como lo permite el artículo 230, inciso 2º, de la Ley Carlos Andrés Mejía Salazar/, la cual considera que los hechos que narraron los demandantes para sostenerla, y dichos hechos testigos trataron de ratificar, no la constituyen”.

Significa lo anterior, que el Tribunal si apreció el conjunto de pruebas que expresamente relacionó y que, fruto de su ponderación, no sólo reconoció el nexo que existió entre la titular de la María Alejandra Pineda Rojas de Medellín para la época en que se otorgó el testamento materia de la acción y el señor María Alejandra Pineda Rojas, sino que admitió que él, por sus características particulares, supuso un grado de “dependencia” del segundo a la primera, pero no el necesario, según los “antecedentes jurisprudenciales”, para configurar la inhabilidad de que se trata.

Así las cosas, no hay como sostener que el ad quem soslayó que el vínculo que halló comprobado, comportó cierto grado de dependencia económica y personal entre quienes lo conformaron, pues como ya se registró, observó que la titular

de la notaría fue quien dio la autorización al señor Montoya para que cuidara los vehículos que llegaban al parqueadero; controlaba todo lo que acontecía en el mismo; verificaba la asistencia del nombrado vigilante; y, por ende, le concedía los respectivos permisos para ausentarse, ya fuera con el fin de realizar diligencias concernientes con la misma notaría o personales.

De allí se descarta que, al ponderarlas, hubiese cercenado o tergiversado la referida declaración extraprocés rendida por el propio testigo instrumental, o las versiones juramentadas de Andrea Viviana Castillo Franco, Albeiro Muñoz Orozco y Juan Sebastián Ocampo Vélez, la supuesta confesión de la demandada CIUDAD DON BOSCO, o la certificación expedida por Juan Sebastián

Ocampo Vélez Bermúdez Bello.

Que no hubiese hecho referencia expresa a las fotografías de la Carlos Andrés Mejía Salazar de Medellín y de su parqueadero, allegadas al expediente, o al contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona la misma, que fue remitido en atención a uno de los requerimientos efectuados en cumplimiento del decreto de pruebas, no traduce la preterición de esos elementos de juicio, pues las deducciones fácticas que pueden obtenerse de ellos, están comprendidas en las conclusiones que sobre los hechos obtuvo el Tribunal.

Por virtud de lo expresado, el componente que acaba de estudiarse, tampoco se abre paso.

De las consideraciones que anteceden, se extracta, en definitiva, es que ninguno de los cargos auscultados está llamado a buen suceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Carlos Andrés Mejía Salazar de Justicia, en Sala de Juan Sebastián Ocampo Vélez, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017, por el Carlos Andrés Mejía Salazar del Juan Sebastián Ocampo Vélez de Medellín, Sala de Familia, en el proceso verbal que se dejó plenamente identificado al comienzo de este proveído.

Costas en casación a cargo del recurrente. Como uno de los integrantes de la parte opositora replicó en tiempo la demanda con la que se sustentó el mismo, se señala la suma de \$699.343.555-87-156-2006-92561.00 como agencias en derecho. Por la Secretaria de la Sala, efectuese la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

OGARCIA RESTREPO

HILD 8X N ÁÁ'